

Bajos, Nueva Zelandia, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Turquía, Unión Sudafricana, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, Uruguay, Venezuela.

Abstenciones: Afganistán, Dinamarca, Etiopía, Guatemala, Haití, Irán, Irak, Líbano, Liberia, México, Noruega, Arabia Saudita, Siam, Suecia, Siria, Yemen.

Por 34 votos contra 7 y 16 abstenciones, queda rechazado el proyecto de resolución.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Antes de levantar la sesión, deseo leer la lista de los representantes que desean intervenir en el debate sobre la necesidad para las Naciones Unidas y para sus órganos de recurrir con mayor frecuencia a los servicios de la Corte Internacional de Justicia. Son los representantes de los siguientes países: Polonia, que ha presentado una enmienda, Australia, Irán, Colombia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Canadá, Brasil, Francia y Egipto. La lista está cerrada.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

113a. SESION PLENARIA

*Celebrada en Flushing Meadow, Nueva York,
el viernes 14 de noviembre de 1947, a las 15 horas.*

Presidente: Sr. O. ARANHA (Brasil).

70. Necesidad para las Naciones Unidas y para sus órganos de recurrir con mayor frecuencia a los servicios de la Corte Internacional de Justicia: informe de la Sexta Comisión (A/459)

El PRESIDENTE: Tiene la palabra el Relator de la Sexta Comisión.

Sr. KAECKENBEECK (Bélgica) (*traducido del francés*): Ahora se encuentra en poder de las delegaciones el informe de la Sexta Comisión (A/459), relativo a la necesidad para las Naciones Unidas y para sus órganos de recurrir con mayor frecuencia a los servicios de la Corte Internacional de Justicia.

Este informe, aprobado ya por la Comisión, es bastante largo, por cuanto trata en detalle diversos puntos de derecho y reproduce varias de las declaraciones hechas por ciertas delegaciones. Parece innecesario que se le dé lectura; sin embargo, creo que debo decir algunas palabras de explicación.

Ante todo, hay que hacer una corrección: en el texto inglés del primer proyecto de resolución deben suprimirse las palabras *in particular*, que no figuran en el texto aprobado por la Sexta Comisión.

Lo que confiere auténtica unidad a los tres proyectos de resolución que recomienda la Sexta Comisión es el profundo deseo de la mayoría de las delegaciones—con muy pocas excepciones—de ver una mayor observancia de los métodos jurídicos y judiciales y una mayor utilización de los servicios de la Corte Internacional de Justicia.

Numerosos representantes han expresado un vivo pesar y una real ansiedad por la indiferencia, demasiado a menudo testimoniada, hacia los aspectos jurídicos de los asuntos y por el olvido en que han caído durante estos últimos años los métodos arbitrales y judiciales.

La primera de las tres resoluciones que la Sexta Comisión recomienda a la aprobación de la Asamblea General se refiere a las solicitudes de opiniones consultivas procedentes de órganos e instituciones debidamente autorizadas y relativas a puntos de derecho y, en especial, a la interpretación de la Carta.

La delegación polaca propuso en la Sexta Comisión una enmienda que suprime toda alusión a la interpretación de la Carta, alegando que la Corte carecía de competencia para interpretar la Carta. La enmienda polaca, no habiendo obtenido más que seis votos, quedó rechazada por la Sexta Comisión.

La gran mayoría de los miembros de la Comisión consideran que en las disposiciones que autorizan las opiniones consultivas de la Corte sobre puntos de derecho, nada hay que excluya los relativos a la interpretación de la Carta.

Además, la resolución no tiende de ninguna manera a convertir a la Corte en un órgano que pueda imponer obligatoriamente su interpretación de la Carta a los demás órganos de las Naciones Unidas. El papel que desempeña la Corte al dar una opinión consultiva es el de un experto, un experto particularmente calificado.

Dado que vamos a empeñarnos en una discusión sobre este problema técnico, creo mi deber como Relator el tratar de prevenir ciertos equívocos.

La resolución no crea obligación alguna, por parte de ningún órgano o institución, de solicitar opiniones de la Corte, lo mismo si se tratase de puntos de interpretación de la Carta que de cualquier otra cuestión jurídica. Numerosas delegaciones, sin embargo, creen que es oportuno y deseable, en ciertas circunstancias, buscar ese asesoramiento. Tal es la finalidad de la recomendación.

Lo que se pide a la Corte son opiniones consultivas. Conviene señalar la diferencia existente entre una sentencia, que se obliga para las partes, y una opinión consultiva, que aclara a un órgano o institución lo que es de derecho, o el sentido o alcance de una disposición. En el caso de una opinión consultiva, como acabo de señalar, el papel de la Corte es un papel de experto.

La Corte no puede imponer su interpretación a los órganos de las Naciones Unidas porque esta resolución no crea mecanismo jurídico alguno que se lo permita hacer así; pero hay que distinguir entre lo que es jurídicamente obligatorio y lo que, doctrinal y moralmente, goza de una autoridad enorme. Esta gran autoridad doctrinal y moral es la que hace que la mayoría de

las delegaciones concedan a las opiniones de la Corte un gran valor y lo que les lleva a recomendar que se solicite dicha opinión, en circunstancias apropiadas.

Durante el debate en la Sexta Comisión se ha hecho alusión en distintas ocasiones a los documentos de la Conferencia de San Francisco; y la delegación de la URSS ha prestado, según creo, un servicio a todas las delegaciones al hacer distribuir el documento A/474¹ con el texto del informe redactado por un grupo de juristas en San Francisco, en el que se indica de qué manera y por qué órganos puede ser interpretada la Carta.

En realidad, tanto la mayoría como la minoría en la Primera Comisión se basaron en pasajes distintos de ese mismo informe y creo que para aclarar la discusión, sería útil que proceda a la lectura íntegra del informe, del que quizás no se hayan enterado todas las delegaciones. Helo aquí:

"El Comité II/2 sometió a estudio de esta Comisión la pregunta siguiente: ¿en qué forma y por qué órgano u órganos de la Organización debe ser interpretada la Carta? El examen de este problema nos ha llevado a las conclusiones siguientes:

"En el curso de su funcionamiento, los distintos órganos de la Organización no pueden por menos de tener que interpretar aquellas partes de la Carta que sean aplicables a sus funciones específicas. Este proceso es inherente al funcionamiento de todo organismo que actúe de conformidad con un instrumento que le defina sus funciones y poderes. Ello ocurrirá inevitablemente con el funcionamiento de órganos como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o la Corte Internacional de Justicia. No es por lo tanto necesario insertar en la Carta disposiciones encaminadas a permitir o aprobar la aplicación de este principio.

"Es posible que surjan dificultades en el caso de que existiera una divergencia de opiniones entre los distintos órganos de la Organización relativa a la interpretación correcta de alguna disposición de la Carta. Así, dos órganos pueden sostener puntos de vista diferentes y hasta expresarlos, o aun inspirarse en ellos en sus actividades. Bajo una forma unitaria de gobierno nacional, puede dejarse el cuidado de solventar de manera definitiva tales cuestiones al tribunal judicial más elevado, o a cualquier otra autoridad nacional. Sin embargo, el carácter de la Organización y de su funcionamiento no parece ser el más favorable a la inserción de semejantes disposiciones en la Carta. Si dos Estados Miembros no llegaran a ponerse de acuerdo en lo concerniente a la interpretación exacta de la Carta, son muy libres, naturalmente, para someter su controversia a la Corte Internacional de Justicia, como si se tratase de cualquier otro tratado. Del mismo modo, la Asamblea General o el Consejo de Seguridad estarán siempre facultados, en las debidas circunstancias de tiempo y lugar, para solicitar de la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva acerca del sentido de cualquier disposición de la Carta."

Permitidme un paréntesis: Si la Corte no fuese competente para dar opiniones sobre

puntos de interpretación de la Carta, habría que preguntarse si los juristas que redactaron la Carta de San Francisco hubieran podido escribir esa frase. La repito:

"... la Asamblea General o el Consejo de Seguridad estarán siempre facultados, en las debidas circunstancias de tiempo y lugar, para solicitar de la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva acerca del sentido de cualquier disposición de la Carta."

Prosigo mi lectura:

"Si la Asamblea General o el Consejo de Seguridad prefiriesen seguir cualquier otro método, se podría crear un comité *ad hoc* de juristas para estudiar la cuestión y dar a conocer su parecer, o sería posible, en fin, recurrir a una conferencia mixta. En suma, los miembros o los órganos de la organización podrían recurrir a diversos medios para lograr una interpretación apropiada a sus necesidades. No parece, pues, que sea ni necesario ni oportuno dar en la Carta una lista o descripción de los diversos métodos posibles.

"Naturalmente, ha de entenderse que si alguna interpretación emitida por cualquier órgano de la Organización o por el comité de juristas no fuese aceptable a la totalidad de los miembros, carecería de fuerza obligatoria. En estas condiciones, o en el caso que fuera deseable dar una interpretación autorizada para sentar un precedente, pudiera ser necesario incorporar esta interpretación en una enmienda a la Carta, lo que siempre podría hacerse siguiendo el procedimiento establecido para las enmiendas."

Tenemos aquí una distinción bien clara, que nosotros hemos hecho ya, entre la fuerza obligatoria y la autoridad doctrinal y moral que se asigne a una opinión consultiva de la Corte. Esta autoridad doctrinal y moral, es la que recomienda solicitar de la Corte opiniones consultivas, puesto que la Corte, compuesta de personas eruditas, imparciales e independientes, ofrece garantías muy especiales, y la propia Carta la ha reconocido como el órgano judicial principal de las Naciones Unidas.

He creído deseables todos estos detalles para aclarar el debate, dado que sobre este punto hubo una discusión en la Sexta Comisión.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de Polonia.

Sr. LANGE (Polonia) (*traducido del inglés*): En nombre de la delegación de Polonia deseo presentar una enmienda² a la primera resolución contenida en el informe de la Sexta Comisión. Esta enmienda se refiere a un punto suscitado hace un momento y sobre el que comentó extensamente el Relator. Desearía señalar que, en general, mi delegación favorece la propuesta contenida en la primera resolución. Nuestra objeción se refiere únicamente a una parte del quinto párrafo, que dice lo siguiente:

"Recomienda a los órganos de las Naciones Unidas y a los organismos especializados que examinen, periódicamente, los puntos de derecho difíciles e importantes que surjan en el curso de sus trabajos y, si tales puntos son de la competencia de la Corte Internacional de Justicia y se refieren a cuestiones de principio que sea conveniente resolver—especialmente si se trata de

¹ Véase en los *Documents of the United Nations Conference on International Organization* el proyecto de informe del Relator de la Comisión IV/2, documento WD 269, IV/2/42.

² Véase documento A/472.

las Naciones Unidas o de los estatutos de los organismos especializados . . .”.

Mi delegación propone que se supriman las palabras “especialmente si se trata de puntos de derecho relativos a la interpretación de la Carta de las Naciones Unidas o se refieren a las Naciones Unidas o a los estatutos de los organismos especializados.” En el texto que se ha distribuido a las delegaciones, ese pasaje dice “especialmente si se trata en particular de puntos de derecho . . .” Sin embargo, como ha hecho notar ya el Relator, deben suprimirse las palabras “en particular”.

Nuestras razones para proponer esta enmienda son, primero, que nosotros dudamos que, jurídicamente, el emitir opiniones consultivas sobre la interpretación de la Carta de las Naciones Unidas corresponda en realidad a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y, en segundo lugar, porque tenemos también nuestras dudas en cuanto a la prudencia política de tal procedimiento.

Hablaré en primer lugar de las dudas jurídicas. Una opinión contraria a la nuestra ha sido ofrecida con mucha erudición por el Relator, cuya autoridad en materias de derecho internacional reconocemos todos. Sin embargo, tengo que decir que, en este caso, sus argumentos no me han convencido.

En dos Artículos de la Carta y en dos artículos del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se hace referencia a esta cuestión. El Artículo 92 de la Carta establece que la Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas y dice, asimismo, que el Estatuto de la Corte forma parte integrante de la Carta.

Por consiguiente, puede citar el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia como si fuese parte integrante de la Carta. La Carta misma, en el Artículo 96, dice que “la Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica”. En su segundo párrafo, se concede a algunos otros órganos el mismo derecho a solicitar una opinión consultiva, bajo otras condiciones, pero no creo sea necesario referirnos a ello en este momento.

En el Estatuto de la propia Corte, tenemos dos artículos que se refieren a la jurisdicción de ésta. En el párrafo 2 del artículo 36, nos encontramos con la jurisdicción en cuestiones jurídicas que, entre otras, abarca también las cuestiones de derecho internacional. Sin embargo, en los casos en que los Estados Miembros sometan alguna cuestión jurídica al parecer de la Corte Internacional de Justicia, los órganos de las Naciones Unidas podrán solicitar opiniones consultivas según el Artículo 65, que dice: “La Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto a cualquier cuestión jurídica, a solicitud de cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas o de acuerdo con las disposiciones de la misma”.

Se ha pretendido que en las palabras “cualquier cuestión jurídica” quedan comprendidas, evidentemente, las cuestiones relativas a la interpretación de la Carta. Me es imposible compartir una interpretación tan amplia de las palabras “cualquier cuestión jurídica”, porque si examinan Vds. todo el texto hallarán siempre que se refieren a controversias jurídicas específicas

entre Estados Miembros que son sometidas a la opinión de la Corte, bien por esos Estados directamente o por los órganos de las Naciones Unidas que se ocupan de tales controversias.

Considera que es una interpretación bastante forzada la que incluye dentro del significado de las palabras “cualquier cuestión jurídica” las interpretaciones de la Carta; instrumento éste que es, por así decirlo, la constitución fundamental de las Naciones Unidas, y a base del cual funciona también la propia Corte Internacional de Justicia. Creo que a menos que la Carta dijera explícitamente que en los casos dudosos un órgano como la Corte Internacional de Justicia estaba facultado para interpretar la Carta, tendríamos que seguir una interpretación estricta de las disposiciones y no hacer que la interpretación de la Carta estuviese comprendida en las palabras “cualquier cuestión jurídica”.

En algunos países, pero no en todos, las cortes supremas tienen derecho a interpretar la constitución, generalmente en forma de sentencias sobre la constitucionalidad de los actos de la Asamblea Legislativa. En este caso las constituciones de tales países de ordinario estipulan explícitamente este derecho. Pudiera decirse por analogía que a falta de una estipulación explícita, ha de deducirse que evidentemente los autores de la Carta y los Gobiernos que firmaron la Carta en esa época no tenían intención de incluir la cuestión de interpretación de la Carta dentro de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.

Examinemos las consecuencias que resultarían de adoptarse la interpretación que se nos ha ofrecido: la consecuencia, según creo, sería el alterar la estructura total de las Naciones Unidas y colocar a la Corte Internacional de Justicia en la posición de un órgano que se hallaría en cierto modo situado en un plano superior a los restantes órganos de nuestra Organización. Tal ocurriría en particular si aceptáramos la forma en que está redactada la resolución que se nos ha sometido, por la cual se pide a las Naciones Unidas que periódicamente revisen los puntos jurídicos más importantes y difíciles, incluyendo entre éstos la interpretación de la Carta.

Lo que se propone no es que acusamos allí en algunos casos aislados, sino que lo hagamos sistemática y periódicamente, cada año, cada medio año o cada determinado período de tiempo semejante. Si aprobásemos esa propuesta, colocaríamos realmente a la Corte Internacional de Justicia en posición superior y especial dentro de la estructura de nuestra Organización; posición que ciertamente no fué la que se le quiso dar en la Carta. Con respecto a esto, dudamos no sólo de nuestra capacidad legal para hacerlo así, sino también de la cordura política que supondría el hacerlo.

Hablé ayer¹ sobre un asunto distinto, el de la Comisión Interina de la Asamblea General, y traté de señalar que la aprobación de la resolución que establece esa Comisión alteraría fundamentalmente la estructura de nuestra Organización. Temo que con la propuesta que ahora examinamos, nos hallemos también ante otro intento de cambiar, por medio de una interpretación de la Carta jurídicamente infundada, la estructura de la Organización. En el primer caso, creamos una comisión interina especial para la

¹ Véase la 111a. sesión, en la pág. 371.

que no existía provisión alguna en la Carta. Ahora, queremos dar a uno de los órganos creados de acuerdo con la Carta, ciertos poderes especiales que no están explícita y claramente previstos en la Carta.

Con todo el respeto debido a los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos que se expresaron a favor de una opinión contraria a la mía, he de decir que sería una triste muestra de prudencia política el alterar la estructura de nuestra Organización mediante la aprobación de la propuesta de que ahora nos ocupamos. Si se quiere que nuestra Organización se desarrolle normalmente, creemos habrá de hacerlo a base de la estructura prevista en la Carta. Creemos que sería políticamente muy poco prudente que tratásemos, por razones de conveniencia política, de trastornar la estructura creada en San Francisco. No veo razón alguna para tal cambio; por lo tanto, propongo la enmienda sometida en este momento a los representantes.

Pido a todos los representantes que voten a favor de esta enmienda. Al mismo tiempo querría manifestar, en nombre de mi delegación, que no podremos votar a favor de la primera resolución más que a condición de que se acepte nuestra enmienda.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de Australia.

Sr. EVATT (Australia) (*traducido del inglés*): Desearía hacer algunas observaciones sobre la enmienda presentada por la delegación polaca a la primera de las tres resoluciones que contiene el informe, ya que dicha resolución fué originariamente sometida a la Comisión por la delegación de Australia.¹

He de felicitar al Relator por su labor en la preparación del informe y por la declaración que ha hecho a la Asamblea General.

Al mismo tiempo creo que el Sr. Lange ha abogado a favor de su enmienda con toda franqueza ante la Asamblea General; a los representantes corresponde ahora decidir si habremos de volver sobre la decisión de la Comisión, la cual fué aprobada después de largo debate y un examen escrupuloso en la subcomisión a la que se remitieron estas propuestas.

Séame permitido decir que la enmienda de la delegación polaca no trata sino de eliminar una frase de la resolución original. El representante de Polonia está de acuerdo en que la Asamblea General recomiende a los distintos órganos de las Naciones Unidas y a los organismos especializados que de tiempo en tiempo examinen las cuestiones de derecho que se presenten en el curso de sus actividades—con tal de que se trate de cuestiones “difíciles e importantes” y cuestiones que supongan “puntos de derecho”—y que en tales casos los distintos órganos remitan las cuestiones jurídicas a la Corte de Justicia Internacional para que ésta dicte una opinión consultiva conforme a la Carta. No objeta a esto el representante de Polonia; a lo que sí objeta—y su enmienda trata de eliminar el pasaje pertinente—es a la posibilidad que sugiere esta recomendación: la de incluir entre esos puntos jurídicos, los que se refieran a la interpretación de la Carta de las Naciones Unidas, o de los estatutos de los organismos especializados. Ahora bien, estos son precisamente, claro está,

los problemas que los distintos órganos tendrán que solventar; no son cuestiones jurídicas ordinarias las que se revelarán como de difícil solución, ni las que se presentarán difíciles, importantes, y capaces de plantear cuestiones de principio.

Los problemas que se plantean continuamente a ciertos órganos son los que se relacionan con el significado y la aplicación de la Carta, de manera que, aunque la enmienda polaca revista la forma de una enmienda, de aceptarse por la Asamblea General quedaría desvirtuado prácticamente el propósito de la primera resolución.

El representante de Polonia divide sus argumentos en dos puntos. Pregunta, por un lado: “¿Podemos hacerlo?, ¿estamos facultados para pedir a la Corte opiniones consultivas sobre la interpretación de la Carta?”, y, en segundo lugar, agrega: “¿es prudente hacerlo así?”.

He de manifestar sin reservas que tenemos facultades para hacerlo y que conviene que hagamos esta recomendación, dejando, naturalmente, a la discreción de cada órgano de las Naciones Unidas el actuar como le parezca oportuno en cada caso particular.

En primer lugar, ¿tenemos facultad para hacerlo? El Artículo 96 de la Carta dice que la Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva. ¿Sobre qué? Sobre cualquier cuestión jurídica. No existe restricción alguna en cuanto a cuestiones jurídicas. ¿Por qué interpretarlo como excluyendo las cuestiones relativas a la interpretación de la Carta de las Naciones Unidas?

En realidad, el Artículo 103 de la Carta es la ley suprema de las Naciones Unidas, porque este Artículo dice: “En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta.” Por lo tanto, la Carta no sirve sólo de medida jurídica de las obligaciones de los Estados que componen las Naciones Unidas, sino que es la ley suprema, y cualquier otro acuerdo internacional que esté en contradicción con la Carta ha de rendirse ante ella.

Según el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, al que se refirió el Sr. Lange, se establece que la jurisdicción de la Corte en conflictos jurídicos abarca cuestiones como la interpretación de un tratado. El ejemplo más palmario de tratado multilateral es la propia Carta de las Naciones Unidas y la interpretación de esa Carta es evidentemente, según creo, una cuestión jurídica. Por lo tanto, en virtud del Artículo 96 de la Carta, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o cualquier otro órgano u organismo especializado de las Naciones Unidas facultado para ello por la Asamblea General será competente para hacer preguntas a la Corte de Justicia Internacional relativas a la interpretación de la Carta.

Estoy completamente de acuerdo con el punto de vista del Relator. Séame permitido señalar que la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el documento A/474 que está ya en poder de los miembros de la Asamblea General, puso a nuestra disposición el

¹ Véase documento A/C.6/165.

informe del Comité Especial de Juristas que estudió este problema en San Francisco. Se pusieron a analizar esta misma cuestión y dijeron en este documento: "Del mismo modo, cabría siempre la posibilidad de que la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, en las debidas circunstancias, pidiesen a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre el significado de una disposición cualquiera de la Carta."

El mismísimo punto de derecho que ahora se plantea fué tratado ya por este comité de juristas eminentes, y después de estudiarlo, se aprobaron los términos de la Carta. Este documento muestra así bien claramente, que ha quedado implantado el derecho de los distintos órganos de las Naciones Unidas a hacer preguntas relativas a la interpretación de la Carta.

El Sr. Lange pasó después al segundo punto: ¿Debemos hacerlo? El teme—y yo no sé por qué ha de sentir ese temor—que la Corte se convierta en un órgano superior a los demás de las Naciones Unidas. ¿Por qué abrigar tal temor? Después de todo, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General eligen a este tribunal de 15 juristas y si existe un organismo que tenga derecho a dar una opinión jurídica sobre el sentido de un instrumento internacional, de un tratado internacional o de la Carta, será precisamente una institución que es el tribunal más competente del mundo para hacerlo así. Eso no puede negarse.

El problema reviste pues, ahora, esta otra forma: de vez en cuando se suscitan cuestiones, cuestiones que son importantes y difíciles. Se plantean problemas de principio que afectan al funcionamiento de los diversos órganos. ¿Por qué no han de gozar éstos de la oportunidad, y por qué no debieran tener, en circunstancias apropiadas, el deber, de pedir a un organismo competente que exprese una opinión sobre el significado jurídico de la Carta?

En la actual Asamblea General y, más especialmente, en la Primera Comisión, hemos tenido debate tras debate sobre cuestiones con respecto a las cuales se manifestaron vivas divergencias de opinión sobre la interpretación de la Carta. Unos, por un lado, han alegado que lo que se ha hecho constituía una violación de la Carta y, otros, han dicho que estaba en realidad conforme a ella.

¿Quién va a decidir esto? Es cierto que cuando se trate de los asuntos administrativos ordinarios de cada órgano, la Asamblea General es la que decide estas cuestiones o, sin decidir las, aprueba una resolución determinada y prosigue sus trabajos.

Mi argumento se aplica igualmente a los distintos Consejos, como el Consejo de Seguridad y otros organismos. La cuestión de competencia se plantea a cada momento en el Consejo de Seguridad y la tarea del Consejo se vería ciertamente facilitada si le fuese posible examinar periódicamente estas cuestiones y pedir aclaraciones a la Corte Internacional de Justicia sobre la interpretación de la Carta y la forma de aplicarla a los casos concretos que de vez en cuando surgen en el Consejo o en otros órganos de la Asamblea General.

Cuando la Corte tome una decisión, será puramente consultiva. Tal y como ahora se propone,

la opinión que emita no constituye una orden que haya de serle impuesta a nadie. Es una opinión consultiva que se da al órgano que la solicita. No obliga a actuar en ese sentido; sería la expresión del parecer del tribunal supremo del mundo, por lo que al derecho internacional respecta. Estimo que ello facilitaría el trabajo de las Naciones Unidas. En todo caso, después de la más cuidadosa consideración, la Comisión que trató este problema adoptó el parecer de que, en primer lugar, la Corte era competente para hacer esto y, en segundo lugar, que en el interés de las propias Naciones Unidas, era deseable seguir tal procedimiento.

Sostengo que no es una proposición dirigida hacia un problema determinado o que llame la atención hacia algo de lo que esté pendiente en la Asamblea General, no hacia cualquier otro asunto de esta clase. Es simplemente una recomendación que invita a los distintos órganos a que analicen con regularidad la situación; y si se han suscitado cuestiones jurídicas, en especial las que se refieran a la Carta y a su interpretación, que sean difíciles, importantes y encierren cuestiones de principio, esos serán precisamente los típicos ejemplos de casos en que el asesoramiento a los órganos y a las Naciones Unidas sería valiosísimo.

Después del más minucioso estudio, la Comisión derrotó la enmienda polaca por 39 votos contra 7, y la propuesta principal que aquélla trataba de enmendar fué aceptada por gran mayoría. Estimo que en esta Asamblea debiéramos adherirnos al parecer de la Comisión y apoyar su recomendación. Para terminar, he de rendir de nuevo tributo al Relator por la claridad con que ha expuesto su tesis ante la Asamblea General.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante del Irán.

Sr. ABDON (Irán) (*traducido del inglés*): Después de las explicaciones que nos ha dado nuestro Relator y de la sensata exposición que nos ha hecho el representante de Australia sobre la enmienda polaca y sobre la primera resolución contenida en el documento A/459, nada tendría que añadir. Somos en efecto partidarios de las tres resoluciones que contiene ese documento.

Para evitar la prolongación del debate, me permito simplemente hacer unas cuantas aclaraciones y formular una breve declaración sobre la tercera resolución, propuesta por la delegación del Irán.

Esta resolución señala a la atención de los Estados que no hayan aceptado todavía la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia la importancia de que el mayor número posible de ellos acepte esta jurisdicción con las menos reservas posibles. También señala a la atención de los Estados Miembros la utilidad de incluir en todos los tratados y convenios una cláusula de arbitraje que prevea el recurso a la Corte Internacional de Justicia en caso de que se suscite alguna diferencia de opinión sobre la interpretación y aplicación de tratados o convenciones. Finalmente, como norma general, recomienda a los Estados Miembros que sometan sus controversias de índole jurídica a la Corte Internacional de Justicia.

La delegación del Irán presentó a la Sexta Comisión un proyecto a ese efecto (documento

A/C.6/164), que sirvió de base de discusión y ha dado por resultado el proyecto de resolución de que ahora nos ocupamos.

La cuestión de si ha de ser o no obligatoria la jurisdicción de la Corte para todos los Miembros de las Naciones Unidas o de si pudiera ser facultativa, fué discutida ya en San Francisco. El sentimiento general expresado en esa Conferencia estaba a favor de que la jurisdicción de la Corte fuese obligatoria, como se deduce del informe que la Cuarta Comisión presentó a la Asamblea General en la Conferencia de San Francisco.

La delegación del Irán figuraba entre las que deseaban que se hiciese obligatoria esta jurisdicción; se esforzó cuanto pudo en conseguir que fuera aceptado su punto de vista. Una aplastante mayoría de las delegaciones mostró también idéntico deseo; la razón de que nuestros esfuerzos resultaran inútiles fué que ciertos países, cuya participación en el mantenimiento de la paz y la seguridad era fundamental, no se hallaban entonces dispuestos a apoyarlos.

La delegación del Irán propuso entonces un proyecto de resolución que reflejaba el sentimiento general existente en la Conferencia de San Francisco, a favor de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, en el que se pedía que:

"... la Conferencia de las Naciones Unidas recomiende a los Miembros de la Organización que en cuanto les sea posible hagan una declaración de que aceptan la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional con arreglo a las disposiciones del Artículo 36 del Estatuto".¹

Este proyecto de resolución fué aprobado en la Conferencia de San Francisco en la sesión celebrada el 15 de junio de 1945.

Aunque esta resolución expresaba el deseo de una gran mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas, estamos todavía muy lejos de tratar de resolver las diferencias jurídicas recurriendo a la Corte Internacional de Justicia.

La delegación del Irán, habiendo observado con pesar esa tendencia, pensó en someter a la Sexta Comisión de la Asamblea actual un nuevo proyecto de resolución en el mismo sentido, pero de mayor alcance, basándose en las siguientes consideraciones:

1. Hemos comprobado que de 1922 a 1940 la Corte Permanente de Justicia Internacional había tenido ocasión de dictar sentencia en 32 controversias internacionales y de emitir dictamen sobre 27 problemas jurídicos. Además, 45 Estados habían aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Por el contrario, hasta ahora no se ha remitido un solo caso a la Corte Internacional de Justicia y 28 Estados han reconocido su jurisdicción obligatoria o se encuentran ligados todavía por su adhesión a la cláusula facultativa de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Esto es tanto más lamentable cuanto que la Corte Internacional de Justicia, a diferencia de la de la Corte Permanente de Justicia Internacional, forma parte de la Organización de las Naciones Unidas.

2. De un cierto número de los Artículos de la

¹ Véase *Documents of the United Nations Conference on International Organization*, actas de la segunda sesión de la Cuarta Comisión, documento 1007, IV/12.

Carta se puede fácilmente llegar a la conclusión de que todos los Estados deben buscar una solución a las cuestiones de índole jurídica en el órgano judicial de las Naciones Unidas, es decir, en la Corte Internacional de Justicia. Esta idea se expresa en el preámbulo a la Carta, en la que los pueblos de las Naciones Unidas proclaman concretamente que se hallan resueltos a "crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional".

El párrafo 1 del Artículo 1 de la Carta expone también la misma idea con las siguientes palabras: "... de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional ..."

En la misma idea se inspira el párrafo 3 del Artículo 36, al decir:

"Al hacer recomendaciones de acuerdo con este Artículo, el Consejo de Seguridad deberá tomar también en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte."

3. No puede caber duda alguna de que la verdadera solución de las controversias de orden jurídico es la que dan los órganos que esencialmente son de carácter judicial. La resolución a que llegue un órgano político no podrá jamás convencer a la parte cuya tesis se base en razones jurídicas.

Además, un fallo judicial liga a las partes, no sólo jurídica sino también moralmente, mucho más fuertemente que las soluciones políticas, en las que una de las partes o inclusive las dos, creen a menudo haber sido tratadas injustamente. Efectivamente, las decisiones adoptadas por órganos políticos, se prestan a ser a veces injustas, insuficientes y hasta arbitrarias.

Sin embargo, somos demasiado realistas para creer que la Corte de Justicia Internacional pueda, hoy por hoy, hallar solución a todas las controversias. No hemos, por desgracia, llegado todavía a ese punto. La actual atmósfera internacional se halla bien lejos de prestarse a la creencia de que el órgano judicial de las Naciones Unidas es la única autoridad competente para resolver las controversias internacionales.

Creemos, sin embargo, que incluso en los asuntos políticos que revisten un aspecto jurídico, sería mucho mejor poder recurrir a la Corte Internacional de Justicia; facilitaría ello en gran medida la solución de tales controversias.

4. Además, creemos que de someter controversias internacionales de índole jurídica a la Corte Internacional de Justicia, se aumentaría considerablemente el prestigio de las Naciones Unidas. Como resultado de la frecuencia de este recurso a la Corte, los Estados Miembros tendrían cada vez mayor confianza en las Naciones Unidas, porque sabrían que si sus derechos fuesen desconocidos, podrían siempre dirigirse a la Corte para obtener justicia. Por otra parte, sabrían también que en caso de hacerse cualquier tentativa para infringir el derecho, existiría un órgano judicial para obligar a que se respetara el derecho y la justicia.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, y el hecho de que cuatro de las cinco

Grandes Potencias han aceptado ya la jurisdicción obligatoria de la Corte, podemos abrigar la esperanza de que los Estados que no han depositado todavía sus instrumentos de aceptación, lo harán así lo antes posible.

Esas fueron las razones que inspiraron nuestro proyecto de resolución (documento A/C.6/164), el cual sirvió de base para la discusión de la Sexta Comisión y condujo al proyecto conjunto francoirani, en el que se fundó la tercera resolución contenida en el documento A/459 que ahora se halla ante la Asamblea General.

Al rogarles que lo aprueben, pido a todos los representantes de esta Asamblea que intervengan cerca de sus Gobiernos para que éstos, una vez que haya sido aprobada la resolución, actúen conforme a ella.

Espero que con la aplicación de esta resolución, la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia se realizará de hecho si no de derecho, lo cual promoverá los intereses de las Naciones Unidas y contribuirá grandemente al mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales.

Mediante la aceptación progresiva de la legislación obligatoria de la Corte, llegará el día en que, al revisar la Carta, tendremos meramente que insertar en ella el ideal establecido ya de hecho, a saber, la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): El representante de Costa Rica tiene la palabra.

Sr. FOURNIER (Costa Rica): La delegación de Costa Rica considera que la expedición y eficacia del trabajo en las sesiones plenarias de la Asamblea General, exige que no se repitan aquí argumentos ya expuestos en las reuniones de las Comisiones, ni mucho menos se reiteren proposiciones desechadas allá como ocurre con la enmienda de Polonia planteada. Juzga que sólo en el caso de reservas de carácter sustantivo, debe venirse a las sesiones plenarias, si ello es útil para fijar una jurisprudencia o para señalar un rumbo a la Organización, como aspiración de perfeccionamiento hacia el futuro sobre las realidades del presente.

De esta última especie es la declaración que ahora tengo el honor de consignar. Se basa en la que dejara constar en el acta de la Comisión el honorable representante de Colombia, Doctor Yepes, gloria del foro mundial, y a la cual se adhirió la delegación de mi país, con el fin de que la recomendación tercera dirigida por la Asamblea General a los Miembros de la Organización, no contenga especificación restrictiva de la naturaleza de los asuntos que se lleven a la Corte Internacional de Justicia, para que la instancia comprenda no sólo los de carácter legal sino cualesquiera otros, jurídicos o no, tal como lo refiere el informe del Relator.

La proposición acogida por la Comisión de Asuntos Jurídicos es útil, en cuanto estimula el empleo del supremo tribunal. Ese es el único medio de dirimir en una forma concluyente cualquier divergencia que surja entre los Estados, o entre las mismas entidades que integran la Organización, y aun para establecer un sentido exacto en cualquier momento en que hubiere duda o contradicción respecto al contenido de alguna norma jurídica. Por eso dió su apoyo a la

resolución dictada por la Sexta Comisión a iniciativa de la delegación australiana.

No sólo por el interés práctico de definir cuestiones que de otro modo quedarían sin solución y podrían llegar a ser motivo de rozamientos y hasta de conflictos entre las naciones, sino también por propender a un mayor desarrollo de los principios de derecho internacional, en una forma concreta y clara, es indispensable acudir al cuerpo técnico en materia jurídica que posee la Organización.

La República de Costa Rica ha mantenido siempre la tesis de que es indispensable, para el imperio de la paz y la justicia en el mundo, que todas las naciones se obliguen a someter al tribunal internacional toda situación o controversia respecto de otra nación. Y esto sin ninguna reserva. Otros Países han limitado esa sumisión, dejando por fuera los asuntos de carácter político en que estén afectados su soberanía o sus intereses vitales. Pero esa limitación debe ser excluida, porque sirve de evasiva para cuando un gobierno cualquiera pretende imponer una fórmula propia, sin respeto a las alegaciones y derechos de las otras partes interesadas.

Con esa doctrina, al contestar la consulta sobre las proposiciones de Dumbarton Oaks, el Gobierno de Costa Rica expresó su concepto de que, en vez de la redacción adoptada en el Artículo 33 de la Carta, se adoptara una forma imperativa y absoluta que los comprometiera a no emplear la violencia en ningún caso y a acudir al arbitraje o a la Corte Internacional para cualquier dificultad en que se vieran comprometidos con otro Estado, si no se llegaba a un avenimiento directo. Sólo sobre esa base se podrá desterrar definitivamente el uso de la fuerza en el orden internacional. La formación de los Estados nos revela que las instituciones de justicia para los conflictos individuales han sido la base del abandono de la fuerza para el respeto de los derechos de cada individuo.

Fuera de los casos de discusión en la demarcación de las fronteras con los vecinos del norte y del sur, resueltos definitivamente ya por fortuna, Costa Rica ha sido parte en dos litigios internacionales. Ambos los ganó. El último, en el cual discutía con la Gran Bretaña, terminó con un gesto que no es posible dejar de recordar en este momento. El Ministro británico acreditado ante nuestro Gobierno dió una fiesta para celebrar la conclusión de la demanda, mostrando así que el pueblo inglés sabe inclinarse, no sólo con respeto, mas con elegancia, ante la majestad de la justicia.

Desde 1928, en la Conferencia Panamericana celebrada en La Habana, Costa Rica se adhirió a la reserva formulada por el Gobierno de Colombia, en que se declaraba la necesidad de que todos los países civilizados se obliguen a dejar a la decisión de tribunales preestablecidos permanentemente o constituidos en cada caso especial, toda clase de diferencias sin distingo de cuestiones de orden político o de intereses vitales. De suerte que no es una tesis fundada en mera teoría, sino una línea ideológica y práctica de su personalidad internacional.

Es indudable que el órgano preparado técnicamente para descubrir lo que se ha propuesto estatuir el legislador, es al que ha de corresponder la interpretación doctrinaria de las normas.

La Carta no contiene nada al respecto de manera concreta. Da a la Corte Internacional la potestad de dirimir controversias entre Estados y la de emitir parecer en consultas que se le dirijan por las diferentes entidades de la Organización mundial. De modo que es el único cuerpo que puede aclarar cualquier duda o diferencia respecto de la significación de determinado precepto de la misma Carta, por no contener limitación ni exclusión de los asuntos que puede resolver y definir.

Si esto aparece de las normas escritas, también resulta de la concepción orgánica de toda comunidad política y de la naturaleza de los principales elementos del poder público. La división de Montesquieu no ha sido caprichosa, sino un acierto en la percepción funcional de lo que es el gobierno, es un fruto de la vida misma, referido al tiempo en que cada uno de los tres órganos clásicos interviene y a la índole de su propia acción.

En el acto de todo ser consciente hay tres etapas: primera, de deliberación, en que se pesan las circunstancias, los fines y conveniencias, y se clige el camino entre los que están a la vista; segundo, de voluntad, de ejecución, de acción positiva; y tercero, de crítica, en que se califica lo hecho. El primero precede al hecho; el último lo sigue. Lo mismo en los Estados. Delibera el poder legislativo o parlamento; realiza el ejecutivo, y critica el judicial. Por eso el pensador norteamericano definió en pocas pero sustantivas palabras la función de cada uno de los poderes mencionados: el legislativo, dice lo que la ley será, previo el trabajo de deliberación; el ejecutivo dice lo que la ley es, al ejecutarla, acto de voluntad; y el judicial, dice lo que la ley ha sido en relación con hechos determinados, esto es, acto de crítica.

De ahí que pensemos que es la Corte Internacional de Justicia la que debe fijar el sentido de los principios básicos de la Carta. La interpretación de una norma jurídica debe quedar a los expertos en la materia, a los que, además de poseer conocimientos especiales y sobre todo, la disciplina mental indispensable para tarea tan delicada, están imbuídos de la responsabilidad profesional del juzgador.

En la Constitución de varias Repúblicas, entre ellas la de los Estados Unidos de América y de Costa Rica, es la Corte Suprema de Justicia la que tiene a su cargo interpretar las reglas constitucionales, al declarar inaplicable una ley o reglamento si pugna con la Constitución.

La delegación de Costa Rica, en consecuencia, pide se consigne esta declaración y apoyará la resolución contenida en el informe del Relator, sin la enmienda propuesta por la delegación de Polonia, ampliamente desechada en la Primera Comisión, o sea en la inteligencia de que ha debido ser más amplia y de que en el futuro se llegará a esa meta, en interés de la paz entre todos los pueblos, posible sólo a base de justicia y de abandono de todo arbitrio de violencia.

El Sr. Aranha deja la Presidencia y lo sustituye el Sr. Tsiang (China).

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de Colombia.

Sr. YEPES (Colombia) (*traducido del francés*): Desearía ante todo expresar públicamente mi agradecimiento por la alusión, tan elogiosa para

mi país y para mí mismo, que hizo el honorable representante de Costa Rica en el magnífico discurso que acabamos de escuchar.

La cuestión que examinamos en este momento fué largamente discutida en la Sexta Comisión y se podía esperar que no sería reavivada en la sesión plenaria de la Asamblea General; pero puesto que se la ha planteado nuevamente, la delegación de Colombia tiene que definir su posición, como lo hizo ya en la Sexta Comisión.

He de decir que no estuvimos de completo acuerdo con todas las tesis aprobadas por la Sexta Comisión y que figuran en los informes que discutimos en este momento. Pero, como somos respetuosos con las decisiones tomadas por la mayoría, no queremos volver sobre cuestiones ya resueltas en contra de nuestra opinión y democráticamente nos inclinamos ante lo que ha sido decidido por la mayoría de la Comisión. Así es como nosotros entendemos el trabajo de las comisiones de la Asamblea General y el papel que corresponde a las delegaciones que participan en los debates de las comisiones y subcomisiones. La ley fundamental de toda democracia organizada y de toda Asamblea parlamentaria es la sumisión a la mayoría, porque aunque es cierto que excepcionalmente la minoría puede tener razón, es ley constante de la historia que en materia política y social la razón pertenece por lo general a la mayoría.

No ocurre lo mismo con los problemas científicos, como ocurrió en el caso de Galileo, al que citaba ayer desde esta tribuna nuestro eminente colega, el representante de la RSS de Ucrania, me refiero a mi ilustre amigo el Sr. Manuilsky a quien admiro y respeto profundamente.

Si no se acepta la ley de la mayoría en materia política y social se desemboca fatalmente en la tiranía de las oligarquías irresponsables. He ahí una de las razones que nos movieron a aceptar el informe de la Sexta Comisión, a pesar de que en la Comisión no le hubiéramos aprobado en su totalidad. Además, tenemos otros y poderosos motivos de orden jurídico para oponernos a la propuesta de la delegación polaca.

La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial eminente de las Naciones Unidas, el órgano competente para decidir principalmente las controversias de orden jurídico: es lo que está escrito en el Artículo 36 del Estatuto de la Corte. Ahora bien, este mismo artículo alude en primer lugar a la interpretación de tratados como a uno de los puntos que encajan esencialmente dentro de la competencia de la Corte. Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas han firmado este artículo: Tenemos, pues, derecho a extrañarnos que se nos pida hoy volver sobre un artículo como ese, que todos habíamos aceptado en San Francisco. En el fondo, la Carta de las Naciones Unidas es un tratado, un tratado de orden superior, es cierto, un tratado de orden constitucional, pero fundamentalmente un tratado y nada más. Lo mismo ocurre con los estatutos de los organismos especializados. ¿Por qué pretender entonces que la Corte no es competente para interpretar las distintas cláusulas de un tratado si las partes interesadas se lo piden? Adentrarnos por ese camino equivaldría a un lamentable retroceso en relación con las estipulaciones que ya figuran en la Carta.

Un país como el mío, que estima que la competencia y la jurisdicción de la Corte Internacional

de Justicia deben ser ampliadas cada vez más, hasta hacer un día de este órgano la suprema instancia, obligatoria para todos los Miembros de las Naciones Unidas en lo concerniente a la solución de las diferencias internacionales, no puede resignarse a presenciar en silencio una mutilación tal de la competencia de la Corte.

Además, el Artículo 96 de la Carta estipula que la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y los organismos especializados pueden solicitar de la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica. Ejemplo clásico de estas cuestiones que, según el Artículo 96 de la Carta, la Asamblea, el Consejo de Seguridad y las instituciones especializadas pueden someter a opinión consultiva de la Corte, sería la interpretación de algún Artículo de la Carta o de los estatutos de los organismos especializados.

El artículo 65 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia prevé que la Corte puede emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas, o de acuerdo con las disposiciones de la misma. Negar esta competencia a la Corte, como lo prevé la propuesta de Polonia, constituiría una violación manifiesta de la letra y del espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y de la letra y del espíritu de la propia Corte; sería una enmienda lamentable hecha indirectamente en la Carta. Por esto la delegación de Colombia se ve obligada a declarar que votará en contra de la proposición polaca.

Hay que recordar una vez más que esta proposición supone un retroceso inadmisibile, porque, en lugar de ampliar la competencia de la Corte Internacional de Justicia, la restringiría; esta resolución se aparta igualmente de las doctrinas del derecho moderno según las cuales toda controversia debe ser resuelta por la justicia internacional.

Termino, pues, haciendo a la Asamblea, en nombre de la delegación de Colombia, un llamamiento apremiante para que rechace esa propuesta retrógrada que colocaría a las Naciones Unidas en una posición falsa. Esta proposición nos apartaría del verdadero camino, aquel en que la Corte Internacional de Justicia se hallaría facultada para aplicar el derecho y, de este modo, para poner fin al caos y a la anarquía que actualmente reinan en el plano internacional.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Sr. VISHINSKY (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (*traducido de la versión francesa del texto ruso*): La cuestión que se halla ahora sometida a la Asamblea General reviste indudablemente gran interés, no sólo desde el punto de vista teórico sino también desde el punto de vista práctico. Al mismo tiempo esta cuestión rebasa con mucho los límites de la competencia jurídica, puesto que la cuestión que se nos ha sometido conforme a la primera resolución de la Sexta Comisión, consiste no sólo en precisar los términos de la Carta relativos a las atribuciones de la Corte Internacional de Justicia, sino también en definir la competencia de la Corte y esto constituye un problema de gran importancia para todos los demás órganos de las Naciones

Unidas, y en especial para la Asamblea General y para el Consejo de Seguridad.

Siendo ello así, es evidente que la cuestión cesa de ser un problema jurídico ordinario y se convierte en un problema de gran importancia política. En el curso del presente período de sesiones de la Asamblea General, nos hemos tropezado en varias ocasiones, por desgracia, con tentativas hechas por ciertas delegaciones, deseadas de que se procediera a una revisión de la Carta de las Naciones Unidas para adaptarla a sus propios designios, que demasiado a menudo difieren de la misión y de los fines asignados a las Naciones Unidas.

En la hora actual los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas no parece que convengan a todo el mundo. Muy por el contrario, se han convertido para ciertas delegaciones en una especie de obstáculo que les impide realizar sus designios, que están muy lejos de coincidir con la misión de las Naciones Unidas. Estas delegaciones se han estrellado, en especial, contra el Capítulo XVIII de la Carta, que detalla las condiciones en que podrá procederse a una revisión o a una modificación de la Carta. Ello es, según creemos, un ejemplo elocuente de la política que se ha venido haciendo en los últimos tiempos en las Naciones Unidas, y que consiste, bajo pretexto de enmiendas y resoluciones, en tratar de modificar la Carta en el sentido que convenga o parezca necesario a ésta o aquella delegación. No hallándose en posición de modificar la Carta, o ciertas partes de ésta, conforme al método establecido, o creyendo quizá que sería demasiado complicado y molesto el hacerlo así, estas delegaciones, que representan a sus respectivos Gobiernos, estiman aparentemente que sería más cómodo recurrir a maniobras y a procedimientos indirectos. En vez de modificar la Carta, tratan de que se tomen decisiones concretas, de que se adopte alguna determinada recomendación sobre cualquier cuestión que aparente ser abstracta y especiosa, como lo son a menudo las cuestiones jurídicas, para tratar así que se acepten en la práctica los cambios que les parecen necesarios, sin que se proceda a las modificaciones correspondientes de la Carta. Hago estas observaciones con objeto de aclarar el punto de vista en que se coloca la delegación de la URSS al examinar el proyecto australiano. Considera que este proyecto, que prevé la adopción de la decisión particular contenida en el proyecto de resolución que figura en el documento A/C.6/165, en realidad trata de aportar una grave modificación a los procedimientos de las Naciones Unidas, eludiendo la Carta para ello.

En este proyecto de resolución se propone, en efecto, que la Asamblea General recomiende a los órganos de las Naciones Unidas y a los organismos especializados que periódicamente revisen—tales son los términos de la resolución—los puntos de derecho más delicados e importantes que sean de la competencia de la Corte Internacional de Justicia, y en particular, los puntos de derecho relativos a la interpretación de la Carta de las Naciones Unidas o de los estatutos de los organismos especializados, y les aconseja que soliciten una opinión consultiva sobre los puntos así escogidos a la Corte Internacional de Justicia. De este modo, la resolución australiana se propone conferir a la Corte Inter-

nacional de Justicia el derecho a interpretar la Organización.

La delegación de la URSS estima que ello sería injustificado. Está enteramente de acuerdo con la delegación polaca, que se opone a esta resolución. En el caso actual, ocurre precisamente lo inverso de lo que ciertos representantes, en particular el Sr. Dulles, declararon ayer: no es la delegación polaca la que sigue automáticamente a la URSS, sino, por el contrario, la delegación de la URSS la que sigue a la delegación polaca; no lo hace automáticamente—como tampoco la delegación polaca lo ha hecho automáticamente—sino que lo hace con toda conciencia y de acuerdo con su propio juicio.

Digo, pues, que la delegación de la URSS, estimando que está justificada la actitud de la delegación polaca, le presta su apoyo. Hallamos justificada esta actitud porque, como representantes de la URSS, estimamos, al igual que la delegación polaca, que según los términos de la Carta la Corte Internacional de Justicia no tiene potestad para interpretar la Carta. Se ha aludido ya a un precedente histórico, me refiero a la Comisión Especial de la que si no me equivoco formaron parte los representantes de Estados tan competentes como los Estados Unidos de América, el Reino Unido, Francia, Bélgica, Noruega y Yugoslavia. Los representantes de todos esos Estados se pusieron de acuerdo sobre ciertos principios fundamentales, los cuales quedaron claramente expresados en el informe que figura en el documento No. 887, fechado el 9 de junio de 1945. La delegación de la URSS ha hecho que este informe fuera distribuido a todas las delegaciones. Por eso me limitaré a referirme a este documento, sin citarlo aquí en detalle. Debo decir, sin embargo, que este informe ofrece un interés fundamental considerable, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista político.

¿En qué consisten las conclusiones y las proposiciones formuladas por los representantes de esos países en el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que acabo de mencionar? Estas proposiciones tendían ante todo a que cada uno de los órganos de las Naciones Unidas—la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, etc.—interpretase por sí mismo la Carta en el momento de aplicarla, de ponerla en práctica. El que aplica la Carta debe también interpretarla. ¿Qué significa esta fórmula? La respuesta es bien sencilla, para todos los juristas: para poder interpretar la Carta, hay que comprenderla; para poder comprenderla, hay que saber cómo se adapta a las circunstancias prácticas; por consiguiente, aquél a quien corresponda utilizar la Carta debe comprenderla bien, debe interpretarla bien, porque aquí, como en otras partes, comprender es interpretar. Naturalmente—y así ocurre en la práctica judicial de todos los países—un tribunal no pueda aplicar un artículo del código penal si no lo comprende bien o si lo interpreta mal.

Sería extraño en verdad que a un juez que aplica el código penal a tal o cual caso particular se le privase del derecho de interpretar el código del modo que él lo entiende. Es, pues, natural que el que aplica la Carta debe también interpretarla, porque de otro modo sería imposible aplicarla correctamente. Ahora bien, la Comisión de que acabo de hablar anunció muy correctamente este principio, el cual es la única guía

segura de toda actividad, cualquiera que sea. ¿Qué dijo esta Comisión? Dijo que el que aplicaba la Carta debía también interpretarla. Pero, entonces, ¿qué hacer si los diferentes órganos entran en conflicto al aplicar la Carta cada uno por su lado? También la Comisión previó eso, al declarar que si se produjesen divergencias de opinión entre los distintos órganos, respecto de la interpretación de tal o cual artículo de la Carta, dichos órganos podrían recurrir, para una opinión consultiva, bien a la Corte Internacional de Justicia, bien a un Comité *ad hoc* de juristas, bien a una conferencia especialmente convocada al efecto. La Comisión Especial previó, por tanto, tres procedimientos. Si tornamos ahora a la resolución presentada por Australia, parece que la delegación de este país concede la preferencia a uno solo de estos procedimientos, el que consiste en recurrir a la Corte Internacional para una opinión consultiva. Los otros procedimientos no son ni siquiera mencionados. Estamos pues autorizados a pensar que, según la delegación australiana y según todas las delegaciones que apoyan su proyecto, el mejor medio de solucionar los conflictos de ese orden consistiría en recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Ese es un aspecto del problema. La delegación de la URSS desapruueba el modo en que se le ha enfocado.

Hay, sin embargo, otro aspecto, el que se refiere a las cuestiones de principio: ¿tenemos derecho, como lo propone la resolución australiana, a encomendar a la Corte Internacional de Justicia la interpretación de la Carta de las Naciones Unidas? Nos parece que no. Permitidme que exponga brevemente nuestros puntos de vista sobre este tema.

Al adherirse a las opiniones de la resolución australiana, la mayoría de la Sexta Comisión sostuvo con ello las proposiciones que tratan de otorgar a la Corte Internacional de Justicia el derecho a interpretar la Carta. Por lo tanto, cada vez que se trate del modo en que la Asamblea General o el Consejo Seguridad hayan de interpretar tal o cual punto de la Carta, la Corte Internacional de Justicia se encontrará, de hecho, colocada por encima de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.

¿Qué ocurriría si se confiriese a la Corte Internacional de Justicia el derecho a interpretar la Carta? ¿Cuáles serían las consecuencias de una interpretación de la Carta por esa Corte? O la Asamblea General tendrá que considerar esta interpretación como obligatoria—que es, además, el sentido con que ha sido afectada la resolución australiana—o deberá rechazar dicha interpretación. Si al recibir una interpretación de la Corte Internacional de Justicia sobre tal o cual cuestión, o, dicho de otro modo, si al recibir una opinión consultiva sobre una cuestión que suscite una interpretación de la Carta, la Asamblea General rechazase esta interpretación, por no estar de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia, tendríamos entonces que preguntarnos ¿por qué la Asamblea General se había dirigido a la Corte? ¿Por qué se dirigió a la Corte Internacional de Justicia si no iba a tener en cuenta su opinión, o estima esa opinión errónea? Si la Asamblea General cree que es ella la que podrá decidir en fin de cuentas, aunque las recomendaciones o la interpretación de la Corte Internacional de Justicia estén o no justificadas, no hay evidentemente razón alguna para que se dirija a la Corte; bastaría remitir la cuestión a un

comité *ad hoc* de juristas, en la inteligencia de que si su opinión no fuese tomada en consideración sufrirían mucho menor descrédito que la Corte. Se cuenta que se observaba en otro tiempo en Turquía una costumbre según la cual el juez oía a los testigos, pero actuaba de modo exactamente opuesto a lo que le decían. Creo que esta costumbre prevalece todavía en un cierto número de otros países, en donde aun se encuentra la justicia en ese estado primitivo que caracteriza a toda la historia de la humanidad, y, en ciertos países, también la historia de la civilización y de la jurisprudencia. Pero nosotros no podemos adoptar con respecto a la Corte Internacional de Justicia la actitud del juez turco y considerar a la Corte como un testigo poco digno de crédito.

Por consecuencia, si la Asamblea General solicitase la opinión o la interpretación de la Corte Internacional de Justicia con respecto a tal o cual artículo de la Carta, y rechazara después esta interpretación, no haría sino desacreditar a la Corte Internacional de Justicia y, según creo, se desacreditaría también ella misma. Si, por el contrario, la Asamblea General se declara de acuerdo con la interpretación dada por la Corte, eso significará que la Corte Internacional de Justicia es capaz de resolver los asuntos mejor que la propia Asamblea General. Pero entonces, si se admite que la Corte Internacional de Justicia puede y debe resolver las cuestiones mejor que la Asamblea General, ¿por qué no someter a la decisión de la Corte Internacional todas las cuestiones de que se ocupa la Asamblea? ¿No sería esa una actitud mucho más lógica? ¿Por qué, pues, si nuestra Asamblea está menos calificada que la Corte Internacional, ha de tratar de resolver cuestiones que pueden ser zanjadas con más competencia por los 15 jueces de que se compone la Corte Internacional de Justicia? Esa es la razón por la cual esta norma que la resolución australiana trata de hacer aprobar por la Asamblea me parece incompatible con la dignidad de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad y de la Corte Internacional de Justicia.

En la Sexta Comisión protestamos contra dicha resolución por medio de nuestros representantes, porque estimábamos que la adopción de una recomendación fundada en la propuesta australiana constituiría, entre otras cosas, una violación directa de la Carta. En efecto, ¿cuáles son las razones jurídicas que justificarían la introducción de una nueva norma, encaminada a conferir a la Corte Internacional de Justicia el derecho de interpretar la Carta? Pido que se me indique el Artículo de la Carta en que nos fundáramos para ello. Aquí ha hablado el Sr. Evatt; yo no le oí mencionar más que el Artículo 65, el Artículo 36 y hasta, si no me equivoco, el Artículo 96. Ahora bien, el Artículo 36 estipula que la Corte Internacional tiene derecho a interpretar los tratados, pero éste no es el caso de la Carta. Entonces se nos ha preguntado: "¿No es la Carta un tratado?" En el sentido amplio y vulgar de la palabra, la Carta es indudablemente un tratado, pero, desde el punto de vista jurídico, existe una diferencia entre la Carta y un tratado; si no existiese esta diferencia, no habría lugar a hablar separadamente de la Carta y de los tratados. Pero esta diferencia existe y si se estima que la Carta es un tratado hay que considerarla como un tratado de un género particular, como un tratado *sui generis*. Por otra parte, lo que da a la

Carta un carácter particular es, ante todo, el que haya sido aprobada no por dos, tres o cinco partes sino por un número de partes tan elevado que ha perdido su calidad de acuerdo, en el sentido usual de esa palabra. En fin, el carácter particular de este tratado *sui generis* ¿no está señalado por el hecho de que ninguna cláusula de la Carta precisa en qué condiciones podrá denunciarlo tal o cual Estado; cláusula que, como dicen los juristas, es un signo distintivo de todo tratado? Si se lee atentamente la Carta de las Naciones Unidas, no podrá dejarse de comprobar que no contiene Artículo alguno que prevea que esta Carta pueda ser denunciada. Si no admitimos que se confiera a la Corte Internacional de Justicia el derecho a interpretar la Carta, se debe a nuestra actitud de principio sobre la posición de la Corte Internacional, como órgano importante de las Naciones Unidas, respecto a otros órganos principales de la Organización. Me podrán decir, claro está, que existe todavía el Artículo 65. Ayer, el representante de los Países Bajos, respondiendo a mi colega ucraniano, declaró que aun cuando Sir Hartley Shawcross no puede hacer comparecer al Sr. Vishinsky ante la Corte Internacional, basándose en el Artículo 36, podría de todos modos valerse del Artículo 65.¹ Ahora bien, si Sir Hartley Shawcross tiene intención de hacer uso del Artículo 65, es decir, del derecho a recibir de la Corte una opinión consultiva sobre una cuestión jurídica, puede entonces dispensarse de dirigirse a mí; si tiene necesidad de consultar a los expertos en materia jurídica, que lo haga. Por mi parte, tal y como es la situación, yo no tengo necesidad alguna de tal asesoramiento; tampoco tengo razón alguna para aceptar o para rechazar el desafío que Sir Hartley Shawcross ha lanzado con tanto énfasis y solemnidad. Estimo que se engaña de dirección y que su desafío está por completo desprovisto de todo contenido.

Queda, por lo tanto, el Artículo 36 de la Carta, que define de manera bien precisa la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Afirmo que este Artículo 36 no dice nada acerca del derecho de la Corte Internacional de Justicia a ocuparse de la interpretación de la Carta. Les pido que recuerden la opinión que los expertos expresaron ante la Comisión Preparatoria de San Francisco, que era la de que todo órgano encargado de aplicar la Carta debe también interpretarla. Así resulta fácil también comprender el porqué la Carta de nuestra Organización no contiene cláusula alguna que estipule que la Corte Internacional de Justicia puede ser llamada a interpretar la Carta. Por otra parte, no hay que confundir una interpretación de la Carta con una opinión consultiva. Estas son dos cosas bien distintas. Interpretar una ley y pedir a los expertos o a los organismos especializados una opinión consultiva con respecto a esta ley, son dos procedimientos distintos.

Tenemos en efecto el Artículo 65, que autoriza a diversos órganos a solicitar opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia. Pero precisa que se trate de "opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica". Dicho de otro modo, si afirman ahora que la Corte Internacional puede, en virtud de esta cláusula, emitir una opinión consultiva sobre los Artículos de la Carta, eso significa, ni más ni

¹ Véase los *Documentos Oficiales de la Asamblea General*, Segundo Año, 111a., sesión plenaria página 371.

menos, que en su opinión, interpretar los Artículos de la Carta, ver a la Carta en su conjunto, equivale a dar una opinión consultiva sobre cuestiones jurídicas. Con dificultad cabe imaginar una deformación más brutal del sentido auténtico de las palabras. Si hablamos de opinión consultiva sobre cuestiones jurídicas, no debemos perder de vista que la interpretación de los Artículos de la Carta no es una cuestión puramente jurídica y que emitir una opinión consultiva sobre cuestiones jurídicas no equivale de ningún modo a interpretar la Carta.

Tomemos un caso concreto, relacionado con las cuestiones que se plantean en la actualidad. Discutimos, por ejemplo, el problema de la Comisión Interina, denominada "Pequeña Asamblea". Se nos dice que la Comisión Interina está a punto de formarse, o está ya incluso creada, conforme al Artículo 22 de la Carta. Sir Hartley Shawcross hace entonces la propuesta siguiente: "Como no están de acuerdo con esto y estiman que se trata de una violación de la Carta, dirijámonos a la Corte Internacional de Justicia, que nos dirá si la Asamblea General ha violado la Carta o no". Este modo de plantear la cuestión es ridículo. A la Corte Internacional de Justicia, en primer lugar, no le corresponde determinar si la Asamblea General tiene o no razón para tomar esta o aquella decisión; ni siquiera le corresponde determinar si tal o cual delegación ha tenido razón en protestar contra tal o cual decisión. Eso no le corresponde de ninguna manera a la Corte Internacional. En efecto, nos reunimos aquí para discutir libremente y sobre un pie de igualdad, sin que tengamos que justificarlo moral, jurídica o políticamente ante ningún tribunal, ni siquiera ante la Corte Internacional de Justicia. Pero sobre todo, la interpretación de la Carta no es una interpretación jurídica. Pregunten a los juristas si el Artículo 22 ha sido correctamente aplicado en lo que concierne a la Comisión Interina. ¿Qué os podrán responder? Dirán que la Asamblea General puede, en virtud del Artículo 22, establecer organismos subsidiarios. Ahora bien, la Asamblea General estima que esta Comisión es, precisamente, un organismo subsidiario; por consecuencia, no existe violación alguna del Artículo 22. Así es como razona el jurista, pero el político razona de otro modo: os dirá que tienen el derecho moral de apelar al Artículo 22, pero esta interpretación puramente literal de un derecho que les pertenece y esta aplicación al pie de la letra del Artículo 22 son erróneas desde el punto de vista político; no están de acuerdo con el espíritu y la letra de la Carta, en la que deben inspirarse todas las decisiones adoptadas por la Asamblea General. No es sometiéndole a un examen jurídico como se puede determinar si el Artículo 22 ha sido aplicado convenientemente. Este Artículo no define de ninguna manera lo que haya de entenderse por "organismos subsidiarios" y no aclara si la Comisión Interina es un organismo subsidiario. Mas he ahí una cuestión que no se podría resolver con una mera interpretación jurídica de los Artículos de la Carta, sin considerarla desde un punto de vista político. No fué por azar cuando el Sr. Dulles, hablando aquí, desde esta misma tribuna en favor de la creación de una Comisión Interina, clasificó los motivos y las objeciones en dos categorías, según ofrecieran un aspecto jurídico o un aspecto político. Sostengo, por lo tanto, que en esta ocasión el jurista no tiene voz, dado que se trata de una cuestión política y no de una cuestión

jurídica. Si la cuestión reviste también un aspecto jurídico, se debe únicamente a que se viola el espíritu de la Carta, que está expresado en términos jurídicos, ya que se infringen, por ejemplo, las disposiciones previstas en la Carta para las enmiendas que se le quieran aportar, etc. Los que declaran que son los jueces de la Corte Internacional de Justicia quienes deben encargarse de interpretar la Carta, olvidan que en principio los jueces miembros de la Corte Internacional de Justicia deben estar libres de toda tendencia política.

Si los jueces de la Corte Internacional de Justicia se pusieran, por ejemplo, a examinar la cuestión del conflicto entre Albania y el Reino Unido desde el punto de vista político, resultaría por adelantado, que condenarían a Albania. En efecto, las simpatías políticas de esos jueces, que representan a sus Gobiernos respectivos, son por desgracia las mismas que las de sus representantes en la Asamblea General. Ahora bien, según lo que hemos podido comprobar, la mayoría de estos representantes muestran un estado de ánimo que no es motivo de entusiasmo. Si, por el contrario, los jueces examinasen la cuestión desde el ángulo jurídico, estaría dispuesto a fiarme de su competencia. De ello deduzco la siguiente conclusión: la interpretación de la Carta no es tanto una cuestión jurídica como una cuestión política. Lo vemos, por ejemplo, al tratarse de fallar si es legítimo o no crear una Comisión para Grecia encargada de controlar y vigilar Estados soberanos —Yugoeslavia, Albania o Bulgaria. Por esto a la Corte Internacional de Justicia no se le puede encomendar la interpretación de la Carta desde el punto de vista jurídico, y mucho menos desde el punto de vista político. Además, no se puede tolerar que un organismo, cualesquiera que sea, tenga derecho a controlar la actividad de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad. Sostengo que la propuesta australiana no corresponde ni al sentido ni al espíritu ni a los principios de nuestra Organización, la cual prevé la soberanía de todos sus Miembros, ni tampoco tiene nada que ver con la interpretación de la Carta y con el aspecto práctico de nuestros trabajos. Incluso se llega a proponer que la Corte Internacional de Justicia, al interpretar la Carta de las Naciones Unidas, participe en la redacción de disposiciones de principio que le parezca deseable implantar en el porvenir. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la Corte Internacional de Justicia será llevada a participar en los trabajos políticos ordinarios de nuestra Organización la cual, efectivamente, formula principios para el porvenir y se ocupa así de cuestiones políticas fundamentales. La Corte Internacional de Justicia será pues traída al mismo escenario de la actividad política, que es un escenario también de lucha política, porque ésta se concentra necesariamente en los distintos órganos de las Naciones Unidas. Esta tendencia no tiene nada en común con la misión y los principios auténticos de la Corte Internacional de Justicia, según los define en la Carta; traduce, simplemente, los esfuerzos que se vienen realizando para destruir la Carta y sus principios.

La delegación de la URSS, por ello, cree que debe oponerse al proyecto australiano y votar en contra del mismo.

Permítanme que diga dos palabras con respecto a otro documento, el que lleva la signatura A/C.6/169.

La delegación de la URSS no aprueba las propuestas contenidas en esta tercera resolución. En efecto, esta resolución de la Sexta Comisión, aprobada por una subcomisión especial a base de una propuesta mixta francoirania, es absolutamente superflua, por cuanto las únicas disposiciones aceptables que contiene no son sino una repetición de los términos de la Carta de las Naciones Unidas. En cuanto a las disposiciones que no son una mera repetición y que, por así decirlo, poseen cierta originalidad, son inaceptables y contrarias a la Carta. El proyecto de resolución afirma que para la solución de las diferencias entre los Estados sería necesario recurrir lo más a menudo posible a la Corte Internacional de Justicia o como dice la resolución, utilizar los servicios de la Corte. Por nuestra parte, nos oponemos a estas tendencias, que yo calificaría de litigiosas. Eso no es lo que se prevé en el Artículo 33. En este Artículo se dice que las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, no dirigiéndose a la Corte sino por vía de la negociación, la mediación, la conciliación, o incluso por el arbitraje, el cual es también una forma especial de conciliación que no debe ser confundido con el procedimiento judicial; y por último, por medio de la resolución judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.

Observen qué espíritu inspira a nuestra Carta cuando en el Artículo 33 se declara que en caso de controversias entre los Estados conviene ante todo buscar la solución por vía de negociación, conciliación, arbitraje, mediación, etc. Ese es el espíritu amante de la paz. Es lo que inspira a la Carta desde el principio hasta el fin. Pero esta nobleza de espíritu no place a algunos que, aparentemente, no quieren que las partes de una controversia traten ante todo de buscar la solución por vía de negociación, mediación, conciliación, y no recurran sino en último lugar a la solución judicial. En efecto, la resolución declara sin equívocos que conviene recurrir en primer lugar al arreglo judicial. Señala a la atención de los Estados, que no han aceptado todavía la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, la conveniencia de que adopten esa jurisdicción. Señala a la atención de los Estados Miembros la conveniencia de insertar en los tratados cláusulas compromisorias disponiendo que se echará mano, preferentemente, de la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué pues "preferentemente"? ¿Por qué razón he de dirigirme "preferentemente" a la Corte Internacional de Justicia, en contra de esta otra recomendación que ha sido erigida en principio y que figura en el Artículo 33 de la Carta, en donde se hace referencia a negociaciones, conciliaciones, mediación y arbitraje?

La delegación de la URSS estima que esta proposición es artificial. No creemos que la propuesta francoirania tenga el menor fundamento desde el punto de vista de la lógica. Además, está en directa oposición al Artículo 33 de la Carta. El proyecto de resolución señala a la atención de los Estados que no han aceptado todavía la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, con arreglo a los párrafos 2 y 5 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte, la conveniencia de que el mayor número posible de Estados acepte esa jurisdicción con la menor cantidad posible de

reservas. Pero si el proyecto de resolución señala a la atención de los Estados las posibilidades que ofrece el Artículo 36, esta resolución de la Asamblea General es absolutamente superflua, dado que no hace sino reiterar los términos del Artículo 36. Ahora bien, nadie quiere perder su tiempo en simples repeticiones, y en efecto, ésta resolución no ha sido presentada sin alguna razón. ¿Cuál es pues esa razón? Hela aquí: el Artículo 36 habla del recurso a la Corte Internacional de Justicia como de una medida facultativa, mientras que ahora se quiere transformarla en una medida obligatoria, lo cual es contrario a los principios esenciales enunciados en el preámbulo del Artículo 36; preámbulo que ha sido objeto de tantas discusiones en el curso del período preparatorio, ya que varios Estados, entre ellos la URSS, no reconocen el principio de la jurisdicción obligatoria. ¿A dónde nos conduciría pues este acuerdo francoirania sobre jurisdicción obligatoria? Su aprobación conduciría a una violación del párrafo 2 del Artículo 36 de la Carta.

Debido a las consideraciones que acabo de enunciar, la delegación de la URSS no puede adherirse a este acuerdo, a esta resolución, y votará en contra de la resolución, que se halla en directa oposición de los principios enunciados en la Carta de nuestra Organización.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante del Canadá.

Sr. BEAUDOIN (Canadá) (*traducido del inglés*): El punto litigioso relativo a la primera resolución que figura en el documento A/459 ha quedado expuesto con claridad y competencia por el Relator de la Sexta Comisión.

Las delegaciones de Polonia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas opinan, por lo que vemos, que en primer lugar la Corte Internacional de Justicia carece de jurisdicción para interpretar la Carta; y, segundo, que la resolución recomendando que los órganos de las Naciones Unidas sometan a la Corte los puntos de derecho difíciles e importantes, la interpretación de la Carta inclusive, es contraria a la Carta y por lo tanto ilegal.

En cuanto al primer punto, el de si la Corte tiene jurisdicción para interpretar la Carta, el Artículo 92 de la Carta dice que la Corte, por ser el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, funcionará conforme a su Estatuto, que forma parte integrante de la Carta. El Artículo 96 de la Carta autoriza a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad a que soliciten de la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica, y declara que otros órganos u organismos especializados podrán ser autorizados por la Asamblea General para solicitar opiniones consultivas de la Corte sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades.

El párrafo 3 del Artículo 34 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que forma parte integrante de la Carta, dice: "Cuando en un caso que se litigue ante la Corte se discuta la interpretación del instrumento constitutivo de una organización internacional pública . . .", el Secretario deberá tomar ciertas medidas. Está claro por lo tanto que la Corte tiene jurisdicción para interpretar la Carta en los asuntos que sometan a la Corte los Estados.

¿Puede sin embargo la Corte dar una interpretación de la Carta en una opinión consultiva que se le haya solicitado? El artículo 65 del Estatuto dice con toda claridad que la "Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas, o de acuerdo con las disposiciones de la misma". Acaso no sea inútil subrayar otra vez que el artículo 65 establece: "la Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica . . .".

La interpretación del instrumento constitutivo de una organización internacional pública, que menciona específicamente el artículo 34 del Estatuto, es ciertamente un tema sobre el que puede determinar jurídicamente la Corte. De ello se deduce que la Corte tiene jurisdicción para interpretar la Carta, que es el instrumento constitutivo de las propias Naciones Unidas, en un asunto que le sometan dos Estados o cuando un órgano de las Naciones Unidas haya solicitado una opinión consultiva respecto a un punto de interpretación de la Carta.

Se ha dicho que una propuesta similar a la que se encuentra ahora ante la Asamblea General fué ya rechazada en San Francisco. Hemos consultado las actas de la Conferencia de San Francisco y, por nuestra parte, no hemos podido descubrir que tal proposición haya sido rechazada por esta Conferencia durante sus debates sobre la Organización internacional.

La pregunta formulada en San Francisco fué: ¿Cómo y por qué órgano de las Naciones Unidas ha de ser interpretada la Carta? Ante Vds. tienen el documento A/474, presentado por la delegación de la URSS, que contiene una transcripción de las respuestas dadas a esa pregunta. Este documento enumera las conclusiones aprobadas por la Sexta Comisión en San Francisco. En esas conclusiones, preparadas por la Comisión encargada de redactar esta parte de la Carta, se establece, sin que haya lugar a duda alguna, que los órganos de las Naciones Unidas pueden, en el curso de sus actividades diarias, interpretar las partes de la Carta que sean aplicables concretamente a sus funciones. Resulta claro también que la Carta no contiene cosa alguna que la impida interpretar a la Corte. Finalmente, está claro también que los Estados pueden someter un asunto cualquiera a la Corte, que los órganos de las Naciones Unidas pueden solicitar una opinión consultiva de la Corte concerniente a la interpretación que se haya de dar a la Carta.

Puesto que la Asamblea General, en virtud del Artículo 13 de la Carta, puede formular recomendaciones a fin de impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional, no puede ser ilegal que la Asamblea General recomiende a los órganos de las Naciones Unidas y a sus organismos, debidamente autorizados para ello, que planteen cuestiones difíciles e importantes de derecho, incluso la interpretación de sus instrumentos constitutivos, ante la Corte Internacional de Justicia, para que ésta dicte una opinión consultiva.

Estimamos sin vacilación que la resolución propuesta por la Sexta Comisión no sólo está completamente de acuerdo con la letra y el espíritu de la Carta sino que también trata de fomentar el reinado de la ley y del orden fundados en la justicia. La delegación del Canadá apoya sin reservas este reinado de la ley.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante del Brasil.

Sr. AMADO (Brasil) (*traducido del francés*): Diré algunas palabras para reafirmar el punto de vista del Brasil. Ante todo deseo rendir homenaje al esfuerzo que ha hecho Australia en esta Asamblea para subrayar la importancia de la Corte Internacional de Justicia y recordar a los órganos de las Naciones Unidas todos los beneficios que pueden derivarse de este elevado tribunal.

La Corte Internacional de Justicia hereda en efecto todo el prestigio que adquirió su predecesora y los progresos que ésta logró que se hicieran en el desarrollo del derecho internacional.

El principal de los objetivos de nuestra Organización es solucionar los conflictos internacionales por medios pacíficos, conforme a los principios de la justicia y del derecho internacional.

Hasta ahora, sin embargo, la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas que se ha visto menos solicitado. Las tres resoluciones que os ha sometido la Sexta Comisión tienen por objeto precisamente recordar a los Miembros y a los órganos de las Naciones Unidas la conveniencia de consultar con más frecuencia este alto tribunal internacional.

Las dos primeras resoluciones insisten en las opiniones consultivas. Lejos de nosotros el menospreciar su importancia. Baste a este respecto con recordar la opinión consultiva No. 4 de la Corte Permanente de Justicia Internacional relativa a los decretos de nacionalidad en Túnez y en Marruecos, para darse cuenta de todo su valor. No menos cierto es que, en la interpretación de la Carta, las opiniones consultivas podrán ser de gran ayuda.

La tercera resolución señala a la atención de los Estados que no han aceptado todavía la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, la conveniencia de que el mayor número posible de Estados acepte esa jurisdicción con la menor cantidad de reservas posible.

En la Comisión de Juristas que se reunió en Washington y dejó sentadas las bases de la presente Corte Internacional de Justicia, el representante del Brasil intervino en varias ocasiones para que se ampliara hasta el máximo la jurisdicción obligatoria. Mi país ha reconocido hace mucho tiempo esta jurisdicción obligatoria de la Corte y el Congreso brasileño acaba justamente de autorizar de nuevo la adhesión del Brasil a la cláusula facultativa de la competencia obligatoria de la Corte, cabiéndome ahora el honor de anunciar a la Asamblea este acto del Congreso brasileño.

Sin embargo, el llamamiento que de este modo se hace a los Estados para que acepten la competencia de la Corte para solucionar sus diferencias hubiera debido ser redoblado con un llamamiento a los órganos de las Naciones Unidas para que recomienden la tramitación jurídica de ciertas controversias, de las que ahora se ocupan, susceptibles de amenazar la paz y la seguridad internacionales. En efecto, el párrafo 3 del Artículo 36 de la Carta dice que "al hacer recomendaciones, de acuerdo con este Artículo, el Consejo de Seguridad deberá tomar también en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte".

Los órganos políticos, como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, no son competentes para dirimir controversias de carácter jurídico. Corren el riesgo de perder su prestigio si persisten en hacerlo así. En verdad, cuando un conflicto puede ser solucionado de un modo satisfactorio por un tribunal internacional, es prudente, incluso desde el punto de vista político, no resolverlo con métodos políticos.

Séame permitido repetir aquí algunas palabras pronunciadas por el Presidente Aranha en el Consejo de Seguridad, el 3 de abril de 1947, a propósito de los incidentes sobrevenidos en el Estrecho de Corfú; dijo: "El Consejo de Seguridad no es ni puede ser una corte de justicia; es, por excelencia, el órgano político y ejecutivo de las Naciones Unidas. Nuestras funciones no son de carácter judicial, y no nos reunimos aquí en calidad de jueces internacionales".¹

Por lo tanto es indispensable que los órganos de las Naciones Unidas encargados de la solución de las controversias internacionales las sometan a la Corte Internacional de Justicia cuando estas diferencias sean de carácter jurídico, según está, por lo demás, previsto y dispuesto en la Carta.

Claro está que no podemos negar la dificultad que a menudo existe para precisar la noción de controversia jurídica, en relación con la de conflicto político. No existe criterio definido alguno en esta materia.

Algunos Estados han procurado con frecuencia delimitar la competencia jurisdiccional de la Corte mediante la redacción de una lista de cuestiones que no podrían, en su opinión, ser objeto de solución arbitral o judicial. Sin embargo, es motivo de satisfacción comprobar que esta lista disminuye de día en día. Mi país no ha vacilado—y la historia lo reconocerá en su honor—hace algunos años de esto, en someter al arbitraje incluso cuestiones de frontera que tocaban bien de cerca a su soberanía nacional. Pero hoy en día, los organismos internacionales que tratan de una controversia son los que deben examinar, en primer lugar, si corresponde o no a la competencia de la Corte Internacional de Justicia. En caso de que que estos órganos políticos abriguen dudas al respecto, podrán siempre solicitar la opinión de la Corte y, si esta última considerase que el conflicto es de orden jurídico, recomendar a la Corte que lo dirima.

Corresponde a cada uno de los órganos de las Naciones Unidas interpretar la Carta; eso lo sabemos todos y el representante de la URSS nos lo ha reiterado con su elocuencia habitual. La Corte Internacional de Justicia no es el único órgano dotado del privilegio de interpretar la Carta. Desde el punto de vista constitucional, eso es todo lo que se puede decir sobre la competencia de la Corte Internacional de Justicia en la materia. La resolución que la Sexta Comisión ha aprobado no le concede exclusividad alguna; no cambia en nada el principio de derecho objetivo que rige a nuestra Organización. No se propone sino recomendar a los órganos de las Naciones Unidas y a los organismos especializados que hagan uso con mayor frecuencia de una facultad que les está reconocida en la Carta. La resolución no modifica el derecho, no contiene

nada de anticonstitucional. No hacemos sino expresar el deseo de que se cambie la práctica seguida hasta ahora, a favor de otra que pueda dar un resultado más satisfactorio.

Es indiscutible que los órganos de las Naciones Unidas tienen facultad para pedir una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre la interpretación del texto de un tratado, y la Carta no es más que un tratado; si no lo es, ¿qué es lo que puede ser? Expresamos simplemente el deseo de que los órganos de las Naciones Unidas utilicen más esta facultad, porque creemos que hasta ahora no lo han hecho suficientemente. En el pasado se ha dejado de consultar a la Corte Internacional de Justicia en casos en que la consulta hubiera podido dar muy buenos resultados; todos pueden apreciar esto considerando la historia de los años que siguieron a la primera guerra mundial.

Esta recomendación no prestará carácter obligatorio a lo que es facultativo conforme a la Carta; no se propondrá más que favorecer el empleo más frecuente de una facultad ya existente.

Algunos Estados temen que si la Corte Internacional de Justicia interpretase la Carta, lo haría demasiado estrictamente, aplicando normas jurídicas a disposiciones políticas. La experiencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional en su interpretación del pacto de la Sociedad de las Naciones, autoriza a creer que la Corte Internacional de Justicia, como su predecesora, sabrá inspirarse en una comprensión bastante amplia de la índole política de nuestra Carta. Hemos de evitar la anarquía en la interpretación de la Carta; no hay que abusar de la flexibilidad de sus disposiciones. Ha de haber un mínimo de estabilidad como base de toda organización. La flexibilidad tiene sus ventajas. Todo el mundo puede interpretar la Carta: el Consejo de Seguridad la interpreta todos los días. Pero la flexibilidad puede convertirse en una debilidad, nos lo muestran las circunstancias actuales. Como en el orden intelectual, la flexibilidad puede ser también aquí una virtud y un defecto. Si se desea evitar la anarquía en la interpretación de la Carta, no hemos de exagerar. Para lograr ese objetivo, para obtener un mínimo de seguridad, de certeza, lo que debemos hacer es solicitar de la Corte, en los casos más discutibles, su opinión objetiva e imparcial.

Al firmar la Carta los Estados consintieron en renunciar a una parte de su soberanía; y crearon órganos dotados de ciertas facultades. Importa que éstos funcionen normalmente y que no traten de hacer que lo político predomine sobre lo judicial.

No somos soñadores, no queremos precipitarnos, nos apresuramos lentamente—*festina lente*—pero creemos en nuestra Organización. En el reforzamiento de la Corte Internacional de Justicia ciframos una parte de nuestras esperanzas.

Con arreglo a estas observaciones, Brasil votará a favor de las tres resoluciones y lo hará con placer, seguro de obedecer así el espíritu de la Carta.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): El representante de Francia tiene la palabra.

Sr. PAROLI (Francia) (*traducido del francés*): En la Sexta Comisión la delegación francesa se unió a la delegación del Irán para proponer el

¹ Véase las *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad*, Segundo año, No. 32.

texto que ahora se ha convertido en la tercera resolución que se somete a la aprobación de la Asamblea. El texto que así se les ofrece no hace sino recomendar una aplicación completa de las disposiciones de la Carta en materia de solución de controversias jurídicas. Creemos que la solución de dificultades internacionales de índole esencialmente jurídica debe buscarse normalmente mediante procedimientos que sean, también, jurídicos.

Cada día se suscitan múltiples cuestiones en la vida internacional que podrían ser ventajosamente llevadas ante la más alta jurisdicción internacional, que es la Corte Internacional de Justicia. En general, es bueno que se intensifique la actividad de la Corte, para que así se afirme la autoridad del derecho. No se necesita decir que tal actividad no debe inmiscuirse en cuestiones políticas, lo que no haría sino dañar el prestigio y la eficacia de las opiniones de la Corte, pero, a este respecto, las propuestas que les hemos sometido en el informe de la Sexta Comisión contienen las necesarias indicaciones y garantías. La delegación francesa, por eso, votará a favor de la totalidad del informe y de las tres resoluciones actualmente sometidas a la Asamblea.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de Egipto.

Sr. RAAFAT (Egipto) (*traducido del francés*): Permítanme que repita aquí, desde esta tribuna, una frase que pronuncié ante la Sexta Comisión cuando precisamente discutíamos los tres proyectos de resolución de que ahora se ocupa la Asamblea. Dije entonces, al final de una breve intervención, que esos tres proyectos de resolución, que se completan tan armoniosamente, constituyen un indudable progreso hacia la justicia internacional y que si se aprueban totalmente o en su mayor parte por la Asamblea General, podremos decir que no hemos malgastado nuestro tiempo y que la Sexta Comisión ha hecho una buena labor. Soy todavía de la misma opinión.

Esto muestra hasta qué punto mi delegación acepta la Corte Internacional de Justicia, a cuyo estatuto originario se adhirió Egipto en 1937. Nosotros, lo mismo que tantos otros países aquí representados, deseamos ver a esta Corte recobrar nuevo aliento en esta segunda fase de su existencia y salir por fin de su forzado adormecimiento, ejerciendo plenamente sus atribuciones, tanto consultivas como propiamente contenciosas, hasta los límites trazados por su Estatuto y por la Carta de las Naciones Unidas. Ello lograría extender y reforzar el reinado de la ley en asuntos internacionales y quizás traernos un poco esa paz de la que el mundo se ve hoy tan necesitado.

Deberemos pues aceptar sin reserva los tres proyectos de resolución que nos han sido sometidos, si no tuviéramos ya en nuestras manos—iba a decir, sobre nuestras espaldas—un serio conflicto que en la actualidad nos separa de otro Miembro, conflicto todavía sometido al Consejo de Seguridad.

En los pasados meses de agosto y septiembre, al examinar el Consejo de Seguridad el conflicto angloegipcio, mi Gobierno mantuvo que este conflicto era de carácter político, excluyendo así la posibilidad de todo recurso a la Corte Internacional de Justicia. Todavía mantiene la misma posición y la reafirma hoy otra vez, ante la Asamblea General.

Al hacer esta manifestación mi Gobierno no expresa ninguna desconfianza respecto a la Corte, sino que desea simplemente presentar este conflicto en su verdadero aspecto y no permitir que se le sumerja en argucias jurídicas.

Nuestra actitud debe ser, por lo tanto, una de reserva, como lo dice brevemente el informe de la Sexta Comisión, que no ha sido leído en esta Asamblea.

Mi delegación no desea que una aceptación pura y simple por su parte de las tres propuestas resoluciones perjudique de modo alguno a la actitud ya adoptada clara y oficialmente con respecto al conflicto principal que les he recordado y que afecta a nuestros intereses vitales, nuestra igualdad soberana, nuestra soberanía sobre nuestro propio suelo y hasta nuestra existencia misma como nación digna de tal nombre y de una historia que se remonta a más de 40 siglos.

Por esto aun aceptando la primera y segunda resoluciones, relativas a la mayor frecuencia en el empleo de las opiniones consultivas de la Corte por los órganos de las Naciones Unidas, nos veremos obligados a abstenernos de votar la totalidad de la tercera propuesta que trata de la jurisdicción contenciosa de la Corte.

En todo caso, si se decide votar por separado párrafo por párrafo esta tercera resolución, estaríamos dispuestos a aceptar la primera de las tres resoluciones que contiene; parte que en mi opinión es la más importante de todas, ya que señala a la atención de los Estados la ventaja de aceptar con las menores reservas posibles las disposiciones obligatorias del párrafo 2 del artículo 36 de su Estatuto. De este modo habremos demostrado una vez más el interés auténtico que sentimos por el progreso y reforzamiento de esta Corte, unánimemente estimada y que constituye el órgano judicial principal de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Habiéndose agotado la lista de oradores voy a poner a votación la enmienda polaca.

Por 37 votos contra 6 y 4 abstenciones queda rechazada la enmienda.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Ahora pondré a votación por separado las tres resoluciones presentadas en el informe de la Sexta Comisión.

Pongo a votación la primera resolución recomendada en el informe de la Sexta Comisión.

Por 46 votos contra 6 y 2 abstenciones se aprueba la primera resolución.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Ahora pondré a votación la segunda resolución recomendada por la Sexta Comisión en su informe.

Queda aprobada por unanimidad la segunda resolución.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): El representante de Colombia tiene la palabra para dirigirse a la Asamblea General sobre una cuestión de orden.

Sr. YEPES (Colombia) (*traducido del francés*): He comparado el texto inglés y el francés de esta resolución y veo que en el párrafo tercero existe una diferencia notable entre los dos textos. Voy a leer los y podrán juzgar esta diferencia.

El texto inglés dice así: *Recommends as a general rule that States should submit their legal disputes*

to the International Court of Justice; es decir, que el texto inglés invita imperativamente a los Estados a someter a la Corte Internacional de Justicia sus diferencias jurídicas.

El texto francés es el siguiente: *Recommande d'une manière générale aux États Membres de soumettre leurs différends d'ordre juridique à la Cour internationale de Justice.*

Yo no soy un lingüista, pero creo que hay una diferencia fundamental entre los dos textos. El texto francés es una mera recomendación que deja a los Estados en libertad de someter o no sus diferencias de orden jurídico a la Corte Internacional de Justicia. El texto inglés es de carácter imperativo: obliga a los Estados a someter sus diferencias jurídicas a la Corte Internacional de Justicia.

Quisiera que los expertos aclararan este punto antes de que se vote.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Pido al Relator que aclare este punto a la Asamblea.

Sr. KAECKENBEEK (Bélgica) (*traducido del francés*): Si le he entendido bien, el representante de Colombia cree que hay una divergencia entre el texto francés y el inglés de la tercera resolución. El texto inglés, que tengo a la vista, dice: *Recommends as a general rule that States should submit their legal disputes to the International Court of Justice.* Creo que ahí no hay nada de imperativo. Es una recomendación y, como ya se sabe, toda recomendación es algo que puede ser o no obedecido, pero que debería serlo en todo lo posible.

La expresión inglesa *that States should submit* es una manera completamente normal de expresar el deseo de que se haga una cosa; no creo que entre el texto inglés y el francés exista la diferencia que el representante de Colombia percibe entre ellos.

El Sr. Aranhc vuelve a ocupar la Presidencia.

Sr. YEPES (Colombia) (*traducido del francés*): Creo que la cuestión debe ser remitida primero a la Sexta Comisión.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Si existe alguna diferencia entre los dos textos se solucionará al redactarse la resolución en su forma definitiva. La explicación del Relator se tendrá en cuenta al redactar el texto definitivo de la resolución.

Ahora pondremos a votación la tercera resolución.

Por 45 votos contra 6 y 3 abstenciones queda aprobada la resolución.

Sr. YEPES (Colombia) (*traducido del francés*): La delegación de Colombia se abstuvo de votar porque considera que los textos inglés y francés no concuerdan.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Estamos de acuerdo sobre el significado del párrafo en cuestión y no es necesario que se apruebe a este respecto ninguna nueva resolución, quedando bien entendido que la resolución no obliga a someter las controversias jurídicas a la Corte Internacional de Justicia, sino que recomienda simplemente que se haga así.

71. Registro y publicación de tratados y acuerdos internacionales; informe de la Sexta Comisión (A/457)

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el Relator de la Sexta Comisión.

Sr. KAECKENBEEK (Bélgica) (*traducido del francés*): Se os ha sometido el informe sobre registro y publicación de tratados y acuerdos internacionales (A/457). Por haberlo estudiado ya en la Comisión las distintas delegaciones, me parece inútil que se le dé ahora lectura.

Me bastará con que diga que el 4 de septiembre de 1947 el Secretario General había informado, en el documento A/380, del progreso realizado en materia de registro y publicación de tratados y acuerdos internacionales. Dió de palabra a la Sexta Comisión las explicaciones suplementarias que quedaron consignadas en el acta resumida provisional y a las que alude en el informe de la Comisión. La Sexta Comisión recomienda a la Asamblea General la siguiente resolución:

"La Asamblea General

Toma nota del informe del Secretario General (A/380) sobre registro y publicación de tratados y acuerdos internacionales; y

"Señala a la atención de los Estados Miembros las obligaciones impuestas por el Artículo 102 de la Carta."

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Como ningún orador ha pedido la palabra sobre este tema, pasaremos a la votación.

Se aprueba por unanimidad la resolución que figura en el documento A/457.

72. Lugar de reunión de la Asamblea General en su tercer período ordinario de sesiones: a) proyecto de resolución presentado por Francia y Suecia (A/452); b) informe de la Quinta Comisión (A/473)

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): La Asamblea General decidió en su 108a. sesión examinar esta propuesta sin referirla primero a ninguna Comisión. Por lo tanto pasaremos a examinar este proyecto de resolución. A este respecto la Quinta Comisión ha presentado un informe a la Asamblea General relativo a las consecuencias financieras de esta proposición.

Antes de abrir el debate sobre la propuesta francosueca tiene la palabra el representante de Suecia para que, en nombre del Relator, presente el informe de la Quinta Comisión, informe que figura en el documento A/473.

El Sr. Bergstrom (Suecia) lee el informe de la Quinta Comisión "Consecuencias financieras de la proposición tendiente a que la Asamblea General celebre en Europa el período ordinario de sesiones correspondiente a 1948", tal como figura en el documento A/473:

"1. De acuerdo con las instrucciones de la Asamblea General que le fueron comunicadas por carta del Presidente de fecha 10 de noviembre de 1947, la Quinta Comisión ha examinado en su 97a. sesión, celebrada el 12 de noviembre de 1947, las incidencias financieras de la propuesta en-

caminada a que la Asamblea General celebre en Europa su período ordinario de sesiones de 1948.

"2. Se hizo constar que este examen no implicaba ninguna asignación de créditos y que únicamente tenía por objeto hacer saber a la Asamblea General las repercusiones que esta proposición tendrá en el presupuesto de la Organización de las Naciones Unidas. La Quinta Comisión decidió que, puesto que la Asamblea General habría de discutir el fondo de la cuestión en sesión plenaria, se limitaría a señalar, por el momento, las incidencias presupuestarias de la propuesta; en el caso de que ésta fuese acogida favorablemente por la Asamblea General, la Quinta Comisión procedería a un nuevo examen de los cálculos y recomendaría los créditos apropiados.

"3. Debido a las exigencias de este examen, la Comisión dividió los cálculos en dos partes: la primera comprende los gastos previstos para el caso de que la Asamblea General se reúna en Ginebra, y la segunda comprende los gastos previstos para el caso de que la Asamblea se reúna en alguna otra ciudad de Europa. La Comisión se hallaba en posesión de los cálculos del Secretario General (A/C.5/205) y del informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (A/C.5/214). En el primero de estos documentos, los gastos presupuestados se elevan a un total de 2.298.023 dólares, para el caso en que la Asamblea General se reúna en Ginebra, y de 2.444.241 dólares si se reuniese en cualquier otra ciudad de Europa; por el contrario, si la Asamblea General se celebrase en Nueva York, los gastos ascenderían a 961.679 dólares. La diferencia neta entre estas cifras es, por lo tanto, respectivamente, de 1.336.444 dólares y 1.482.562. En su informe, la Comisión Consultiva recomendó que se redujesen los cálculos para Ginebra a la suma total de 1.863.544 dólares. Esta suma excede en 901.875 dólares la de los gastos que serían incurridos si se reuniese la Asamblea General en Nueva York. La Comisión Consultiva ha estimado que la cifra aproximada de 146.000 dólares representa la diferencia probable de gastos si la Asamblea General se reuniese en otra ciudad de Europa, en vez de celebrarse en Ginebra.

"4. A petición del representante de Grecia, la Comisión decidió por 46 votos contra ninguno y 2 abstenciones fijar en 901.875 dólares, conforme a la recomendación del Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas y de Presupuesto, la cuantía de los gastos suplementarios que ocasionaría la aprobación de la propuesta encaminada a que se reúna en Ginebra el período ordinario de sesiones de 1948; de todos modos, en vista del carácter incierto de los cálculos y de las reservas formuladas por el Secretario General para aceptar la cifra indicada, la Comisión ha previsto que el Secretario General podría, de acuerdo con la Comisión Consultiva, recurrir al Fondo de Operaciones, para el caso en que los créditos finalmente asignados por la Asamblea General resultasen insuficientes. Si la Asamblea General decide celebrar su período ordinario de sesiones en alguna otra ciudad de Europa, la cuantía de los gastos será aumentada aproximadamente en 146.000 dólares."

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Queda abierto el debate sobre el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Francia y Suecia.

Tiene la palabra el representante de Francia.

Sr. PARODI (Francia) (*traducido del francés*): La delegación francesa, juntamente con la delegación sueca, tiene el honor de someter a la aprobación de la Asamblea un proyecto de resolución encaminado a que, a título excepcional, se celebre en Europa el tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

Esta propuesta se funda en el artículo 5 del reglamento provisional de la Asamblea General, según el cual ésta puede ser convocada en lugar distinto de la sede de las Naciones Unidas en virtud de una decisión tomada por ella durante un período de sesiones anterior, o a petición de la mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas.

Nuestra proposición sugiere la creación de una comisión, compuesta de representantes de nueve Estados Miembros, que estaría encargada de ayudar al Secretario General en la elección de la ciudad en que habrán de celebrarse las sesiones. Séame permitido añadir que, en este punto, la delegación francesa aceptaría gustosa todas las modificaciones que la Asamblea juzgase pertinentes.

Ante nosotros, además de este proyecto de resolución, se halla igualmente el informe de la Comisión Consultiva, que acaba de ser presentado por el Relator y que estudia, de un modo aproximado, las repercusiones que la celebración en Europa del próximo período de sesiones entrañaría para el presupuesto de la Organización.

La delegación sueca y nosotros, después de madura reflexión y guiados por ciertas consideraciones que quisiera exponer rápidamente, hemos creído nuestro deber hacer esta propuesta.

Ante todo, no debe caber aquí—y a decir verdad, no puede existir—equívoco alguno sobre el sentido de la propuesta que acabamos de presentar. Ni que decir tiene que de ninguna manera se trata—ni por un instante se nos ha ocurrido este pensamiento—de plantear nuevamente la cuestión relativa a la ubicación de la sede de las Naciones Unidas en los Estados Unidos de América. Las Naciones Unidas han tomado una decisión al respecto y durante el presente período de sesiones de nuestra Asamblea se concluirán la financiación y el plan definitivo de los edificios en que esperamos quedar próximamente instalados.

Estamos agradecidos a todos los que, en los Estados Unidos, nos han dado facilidades para llegar a esta decisión. La aceptamos sin reserva y en esto puedo ciertamente hablar tanto en nombre de la delegación sueca como en el de mi propia delegación. Pero no hay contradicción alguna entre la ubicación definitiva de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y el hecho de celebrar excepcionalmente un período de sesiones fuera de Nueva York. He aludido ya al texto del reglamento que prevé esta eventualidad.

En nuestra opinión, incluso cuando las Naciones Unidas dispongan de los edificios cuyos planos se preparan actualmente y que se alzarán mañana contra el cielo de Nueva York, podrá ocurrir todavía, de acuerdo con esa misma disposición del reglamento, que la Asamblea General celebre alguna vez sus períodos de sesiones en otras partes del mundo. Es posible—no lo sé de cierto, pero es posible—que crea conveniente hacerlo así para subrayar su carácter internacional, para suscitar el interés y la simpatía de regiones del globo en que nuestra Organización pueda hoy aparecer

como un algo quizás un poco abstracto, apenas mal conocido o demasiado lejano.

Pero, indudablemente, incluso si ulteriormente parecieran convenientes tales desplazamientos a la Asamblea, serán mucho más costosos, mucho menos fáciles de organizar y a decir verdad, cuando se haya concluido nuestra instalación definitiva no podrán ocurrir sino muy de tarde en tarde. Precisamente por ser el año próximo el último que preceda a nuestra instalación en los edificios definitivos, sometemos la presente resolución.

Sabemos que dentro de un año nos hallaremos en pleno trabajo de construcción de los nuevos edificios de las Naciones Unidas; pero las obras estarán todavía sin terminar y nuestro próximo período de sesiones se celebrará una vez más en las condiciones provisionales de instalación que empezamos a conocer ya bien. En muchos aspectos, estas condiciones provisionales en las que hemos trabajado desde hace más de un año, han estado notablemente bien organizadas. No quiero dejar de reconocer que los problemas inevitables han sido resueltos del mejor modo posible, gracias a los esfuerzos de la Secretaría y a pesar de enormes dificultades. En esta sala, lo mismo que en Lake Success, estamos rodeados de instalaciones confortables y de los medios de trabajo necesarios. Sigue siendo un hecho sin embargo que las condiciones de trabajo de la Asamblea han sido siempre difíciles.

Hemos de realizar diariamente un largo viaje, que nos exige casi dos horas en una jornada, por lo demás, ya muy sobrecargada. Las distintas delegaciones deben encontrar el tiempo necesario, en un momento cualquiera del día, para celebrar sus propias reuniones, que les permitan coordinar el trabajo de sus diversos representantes en las Comisiones, y los jefes de las delegaciones han de dar instrucciones e informar a sus respectivos Gobiernos.

El resultado es que a costa de mucho tiempo y, por decirlo también así, de gran fatiga, nos encontramos al cabo del día con un promedio de solo cinco a seis horas de reunión. Esto nos obliga, al final del período de sesiones, a celebrar sesiones nocturnas, que son difíciles de organizar y molestas para todo el mundo. Resultado de ello es también la larga duración de nuestro período de sesiones. El período de sesiones de la Asamblea General que se celebró en Londres en enero y febrero de 1946 duró 34 días. Sin embargo, tenía un programa bastante sobrecargado, puesto que había de solucionar, además de las cuestiones políticas que le fueron sometidas, todas las cuestiones de organización relativas a su propio funcionamiento.

El período de sesiones que se celebró al final del mismo año, en Nueva York, hace un año, tuvo una duración notablemente mayor y no pudo terminarse sino al cabo de 54 días. Este año, si he llevado bien la cuenta, hemos llegado ya al 60° día de nuestro período de sesiones que no es todavía el último.

Es evidente que el trabajo sería más rápido, y en consecuencia más eficaz, en una ciudad en donde los representantes y los miembros de la Secretaría viviesen en las proximidades del lugar en que han de trabajar. Cuando se reúna la Asamblea General entre las calles 42 y 48, en Nueva York, será posible sin duda celebrar, como

se había ya hecho en Londres al comienzo de 1946 tres sesiones por día, evitando así las sesiones nocturnas. Se podrá en efecto comenzar hacia las 10 de la mañana para terminar hacia las 12.30, reanudar, por ejemplo, a las 14.30, hasta las 5.00, y celebrar la última sesión por la tarde hasta las 19.30 o las 20.00 horas.

Ni que decir tiene que en la duración de nuestros períodos de sesiones influyen muchas otras causas que las relativas a nuestra instalación material. Pero es cierto también que las condiciones de trabajo desfavorables afectan siempre, de algún modo, a la duración de nuestras sesiones. Cabe, pues, la posibilidad de que el período de sesiones de la Asamblea del próximo año, si se celebrase en Europa, pudiera ser con igual cantidad de trabajo, de duración más corta que nuestro período actual. Si consiguiéramos acortarlo de ese modo, habríamos con sólo eso realizado ciertas economías que evidentemente no figuran en los cálculos presupuestarios sometidos a la Asamblea.

No tengo intención de explayarme más sobre estos cálculos presupuestarios y no quiero discutirlos en detalle. Diré únicamente que a mi delegación, después de un primer examen, le ha parecido que podrían ser reducidos considerablemente. Recuerdo, por otra parte, que aparte de los gastos enumerados por la Secretaría y por la Comisión, habría además que tener en cuenta, como lo ha expuesto muy bien el representante de Suecia en la Quinta Comisión, las economías que las distintas delegaciones podrán hacer en sus propios gastos.

Paso ahora a la última consideración y, a decir verdad, la consideración principal que nos ha determinado proponer este proyecto de resolución.

Acabo de señalar el interés que, para la autoridad de las Naciones Unidas en el mundo, tiene el que esta Asamblea se reúna de vez en cuando, y lo repito una vez más, siempre a título excepcional, en distintas partes del mundo. Nos parece que puesto que Europa ha sido la región del universo que más ha sufrido por la guerra; puesto que son los problemas de su reconstrucción, del restablecimiento de su equilibrio, los que influyen hoy más considerablemente en todas las dificultades económicas y políticas cuyas repercusiones tenemos aquí ante nosotros, estaría bien que la Asamblea, en el curso de su próximo período de sesiones, se reuniese en el centro mismo de estos problemas. Nos ha parecido que sería útil que todas las delegaciones tuvieran ante los ojos las condiciones difíciles de la restauración de Europa y esto bien vale el pequeño esfuerzo, el ligero sacrificio, que supondría el no encontrar quizás en la desgraciada Europa el equivalente de la abundancia norteamericana.

A la inversa, nos parece que tendría gran interés para el prestigio y el porvenir de las Naciones Unidas, que Europa presenciase directamente la labor de nuestro próximo período de sesiones y que se fuese enterando, no de lejos sino de cerca, de su funcionamiento y su actividad.

En cuanto al lugar que pudiera ser escogido, no hay necesidad de que señale que la resolución sometida concede una libertad de decisión bastante grande en la elección que se puede realizar. Si la Asamblea estima que se requieren mayores aclaraciones, gustosamente nos adheriremos a su opinión.

He querido exponer y estoy acabando mi aclaración, las consideraciones que movieron a las delegaciones sueca y francesa a proponer que nuestro próximo período de sesiones se celebre en Europa. Hacemos votos para que estas consideraciones sean comprendidas y aprobadas por todos.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante del Reino Unido.

Sir Hartley SHAWCROSS (Reino Unido) (*traducido del inglés*): Esta propuesta plantea cuestiones de carácter presupuestario y de organización que son de gran importancia. No creo que deba excusarme ante la Asamblea General por necesitar un poco de tiempo para hablar de ello. Mi delegación está naturalmente muy predispuesta a oír cualquier argumento razonable a favor de que el próximo año se celebre en Europa el período de sesiones de la Asamblea General. Pero quienes recomiendan el traslado deberán justificarlo.

¿Cuáles son los argumentos que se trata de aducir a su favor? Por lo que se puede ver, las razones para efectuar un cambio tan importante y sorprendente en las disposiciones ya tomadas, podrían clasificarse en una de las cuatro categorías siguientes:

En primer lugar, se puede mantener que la próxima Asamblea General debería reunirse en Europa por la conveniencia o el entretenimiento de las delegaciones. A mí personalmente, me gustaría muchísimo asistir a una reunión de la Asamblea General en París, en Bruselas, en Ginebra o en cualquier otra ciudad europea igualmente atractiva. Todas ellas poseen encantos de distintas clases. Lo mismo ocurre en Nueva York, naturalmente. Sin embargo, no se trata de que la Asamblea General dé ocasión para un viaje de placer, y cuando uno se pone a considerar el coste que ello supone, las dificultades que el cambio y la dislocación de nuestra Organización supondrían, como resultado de la mudanza a Europa, me parece que es evidente que ninguna delegación pediría el traslado por razones de conveniencia o de placer. Sería una manera demasiado frívola de enfocar la cuestión y ya sabemos que los Gobiernos responsables no se conducen de esa manera. Examinemos ahora lo que considero como el argumento más importante.

La segunda consideración es: ¿Cuáles son las consecuencias financieras que implica la propuesta? Esto es una consideración vital, para algunos países por lo menos. No deseo subrayar demasiado nuestra propia actitud, pero en Inglaterra estamos ahora sufriendo restricciones muy severas en cosas muy esenciales y, en particular, en materia de alimentación, por no podernos permitir el lujo de comprar más alimentos en el extranjero. Por esto recibimos, semanalmente, una ración de tocino de una onza y sólo dos onzas de mantequilla. No podemos en modo alguno aceptar frívolamente que se incurra en ningún gasto ocasionado por un cambio del sitio de reunión de la Asamblea General, lo que nos dejaría mucho menos dinero para comprar lo más esencial en el extranjero.

Veamos, ¿cuáles son las consecuencias presupuestarias de este asunto? El proyecto revisado de presupuesto, de la Quinta Comisión, como acaban Vds. de oír de labios del Relator y como se señala en el documento A/C.5/214,¹ arroja un aumento total de 901.875 dólares, como costo de

la celebración de la Asamblea en Ginebra, y a eso habrá que agregar por lo menos 146.000 dólares más si la Asamblea General se celebrase en París, en Bruselas o en cualquier otra ciudad europea. Se ha podido ver, naturalmente, que es en extremo difícil hacer un cómputo exacto, pero quisiera decir, de pasada, y subrayar tan fuerte e intencionalmente como pueda, que estoy seguro de que el cálculo que ha presentado la Comisión Consultiva es demasiado moderado. Los miembros de la Asamblea General deben tenerlo presente.

Como recordarán los miembros, el Secretario General formuló reservas explícitas y dijo que no podía aceptar las reducciones que en sus cálculos había propuesto la Comisión Consultiva. A decir verdad, llegó todavía más lejos, diciendo que desearía preservar el derecho a retirar del Fondo de Operaciones la cantidad que necesitara además de la suma asignada por la Comisión Consultiva.

Me atrevo a decir que la Comisión Consultiva se ha empeñado en permanecer imparcial en extremo, al hacer sus cálculos. Por ejemplo, si uno observa el inciso c) del párrafo 2 del informe, encontrará que se deducen 250.000 dólares porque, según se dice, tres quintas partes del personal que se requeriría para celebrar la Asamblea General en Europa, iría en licencia para visitar el país de origen. ¿Qué significa eso? Yo no sé sobre qué período se extenderían normalmente las licencias de esos 320 funcionarios, pero suponiendo—y creo que se puede razonablemente presumirlo así—que la cifra dada representa aproximadamente la mitad del personal con derecho en el curso de un mismo año a disfrutar de dichas licencias, estas licencias además serían entonces distribuidas por un período total de seis meses; porque, normalmente, es evidente que no estarían ausentes todos al mismo tiempo. No se podría organizar una Secretaría en tales condiciones.

Partiendo de esta primera suposición, la Comisión Consultiva va más lejos y supone que cada uno de los miembros del personal tendría, quizá, derecho a tres meses de licencia para visitar el país de origen. Yo creo que, de hecho, estas vacaciones son por término medio, de menor duración. Sin embargo, si fuese correcto, querría decir que algo así como la mitad del número de esos funcionarios quedaría sin hacer nada en Ginebra, París o Bruselas, o cualquier otro lugar que se escoja para la reunión, para que se pudiera reunir el personal necesario mientras se hallara reunida la Asamblea General.

En consecuencia, durante todo ese período de tres meses, habría que emplear en Nueva York a funcionarios supernumerarios, para que se encargasen del trabajo que, normalmente, hubieran desempeñado los titulares que disfrutaban de licencias para visitar el país de origen. Tendremos, pues, que llegar a una de las dos conclusiones siguientes: o bien la Secretaría debiera haber agregado a su cálculo de los gastos reales los derivados del reclutamiento de personal supernumerario en Nueva York, o, si éste no se necesita parecería que estuviesen de más muchos

¹ Véase el 14º informe de la Comisión Asesora sobre cuestiones Administrativas y de Presupuesto: cálculos de los gastos para celebrar el período ordinario de sesiones de 1948 de la Asamblea General en Europa.

de los que estuvieren haciendo uso de esas licencias pasando su tiempo en la ociosidad en París, Ginebra o Bruselas, valiendo más que nos pasásemos sin sus servicios.

Sea lo que fuere, este ahorro de 250.000 dólares no es naturalmente más que un truco de tenebrosidad de libros y no un cálculo auténtico.

Otro ejemplo de la neutralidad benevolente, si se me permite llamarla así, de la Comisión Consultiva es su cálculo de 5.000 dólares para costo suplementario de cablegramas. Reflexionemos sobre esta cifra. Si la Asamblea General dura 60 días—y eso no es una sugestión extravagante—eso significa que gastaremos únicamente unos 84 dólares cada día en cablegramas y, sin ser un experto en la materia, digo que esta partida concretamente, y muchas otras—he escogido únicamente aquélla como ejemplo—han calculado muy por bajo los gastos suplementarios de funcionamiento que realmente entraña la propuesta mudanza.

Se ha sostenido—como lo acaba de hacer el Sr. Parodi—que al calcular las consecuencias financieras de la mudanza propuesta, deberían de tenerse en cuenta los ahorros que realizarían ciertos gobiernos por el hecho de que serían más cortos los viajes que se deberían realizar.

Evidentemente, si la próxima Asamblea General fuera a reunirse, por ejemplo en París, la delegación francesa realizaría un ahorro considerable en sus gastos de viaje o de otro tipo, pero, aunque ahorren dinero algunas delegaciones, hay que tener una visión de conjunto. ¿Habría ahorro total alguno a cuenta de los gastos de viaje y otros accesorios? Aquí me atrevo a decir, examinando el resultado total, que la posible economía a que aludió el Sr. Parodi, aunque sin precisarla, no existe en modo alguno. Los Sres. representantes observarán, además, que la Comisión Consultiva se ha mostrado muy prudente en su cálculo a este respecto, pero la Comisión Consultiva está obligada a llegar a la conclusión—cito ahora las palabras de su informe—que la cifra de los gastos “seguirá siendo más elevada que la suma que se necesitaría para un período de sesiones que se celebrase en Nueva York”.

Incluso si vamos más lejos y examinamos la posición de delegaciones como la mía propia, que tendrían que hacer un viaje mucho más corto para llegar a una capital europea (dejo a un lado la posición de la delegación del país en cuya capital se celebre la Asamblea General, porque evidentemente ésta no podría sino salir ganando); incluso en nuestro caso, digo, el aspecto financiero de la cuestión no tiene nada de atrayente. Los países europeos que contemplan ligera y gustosamente la posibilidad de la reunión de la próxima Asamblea General en Europa, deben tener bien en cuenta que a menos que la Asamblea General se celebre en su propio país—y no se puede celebrar en todas y cada una de las capitales europeas—incurrirán en grandes gastos.

Con respecto al Reino Unido, hemos estudiado la cuestión con gran cuidado y nos hemos encontrado con que calculando los gastos con la mayor moderación y computando al máximo todas las economías posible—economías en viajes, en el alojamiento y de tiempo—los gastos reales de nuestra delegación serían inferiores, aunque muy ligeramente, a los de aquí. A pesar de eso, el re-

sultado financiero del traslado se cifraría en un desembolso de, por lo menos, 60.000 dólares. Eso representa, me atrevo a creer, un ejemplo típico de la forma en que el traslado afectaría a los países europeos, con excepción de aquél dentro de cuyas fronteras se reuniese la Asamblea General. En fin de cuentas, nos hallaríamos todos con que nuestros gastos netos aumentarían muy considerablemente.

En la forma actual de esta resolución, no puedo discutir qué parte determinada de Europa sería elegida por este comité móvil del Secretario General y otros nueve señores cuya creación se nos ha propuesto, pero he de recordar a los representantes que, evidentemente, no cabría la menor esperanza de ahorrar moneda fuerte si le tocase a Ginebra ser la ciudad escogida.

Todo esto en cuanto a lo que a incidencias financieras se refiere. No quiero exagerarlas ni insistir demasiado en su importancia. Son muy importantes, pero sin duda hay que convenir en que las razones financieras, por sí solas, no deben determinar nuestra conducta; aunque he de dejar bien en claro, como traté de hacerlo desde el principio, que dada la actual situación de mi país sería muy poco correcto que no examinásemos, literalmente, el gasto de cada dólar. Me atrevo a pensar que todos los países europeos que ahora se encuentran en dificultades económicas, desearán examinar seria y responsablemente si pueden justificar el aumento de gastos que el traslado supondría.

¿Existe alguna otra consideración que, en contra del aumento de gastos, pueda hacer inclinar la balanza hacia la tesis opuesta? Examinemos por un instante algunas de las consecuencias administrativas del desplazamiento. No trataré más que de un pequeño número de ellas, aunque se podrían gastar horas y horas examinando los inconvenientes que ello causaría. Como recordarán los representantes, con anterioridad a la apertura de un período de sesiones de la Asamblea General, la Comisión Interina que se cree al efecto debe ocuparse de preparar el trabajo de la Asamblea. El Consejo de Seguridad, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, la Comisión de Cuotas, todos estos organismos deben redactar sus informes y, en general, preparar el trabajo de la Asamblea General.

¿Qué es lo que se piensa hacer con respecto al personal del Consejo y de las Comisiones? ¿Va a preparar este personal los informes en Nueva York e inmediatamente salir en avión para Europa? Tal manera de proceder presentaría graves inconvenientes, causaría considerables molestias y privaría a los representantes de los distintos países de toda posibilidad de consultar a sus Gobiernos antes de la apertura de la Asamblea General.

¿Qué otra solución cabe? ¿Van a ser preparados los informes con varios meses de antelación a la apertura del período de sesiones de la Asamblea General, a fin de que haya tiempo de hacerlos imprimir, distribuirlos y someterlos a la discusión y el examen de los Gobiernos respectivos? Este procedimiento produciría también resultados muy molestos. No solamente sería injusto y descortés para con la Asamblea General, sino que sería también totalmente ineficaz, puesto que la Asamblea se vería privada de los datos más recientes acerca de las actividades de

esos órganos hasta la apertura del período de sesiones.

¿Y qué decir de la situación en que se colocaría el Consejo de Seguridad? Según la Carta, naturalmente, el Consejo de Seguridad está obligado a mantenerse permanentemente en sesión. Las razones para ello son bien claras; no tengo necesidad de exponerlas en detalle. Supongo que se podrá sostener, desde el punto de vista estrictamente jurídico, que como el Consejo de Seguridad debe estar en sesión permanente, no puede abandonar Nueva York. Yo no deseo adoptar este punto de vista ni tomar una actitud demasiado formalista, creo incluso que, jurídicamente, conforme a la Carta, el Consejo de Seguridad podría si fuese indispensable, salir de Nueva York con el Comité de Estado Mayor, la Comisión de Energía Atómica y todos los demás órganos. Sin embargo, creo que los señores representantes deberán de comprender que si se suscitase alguna cuestión urgente y grave, y si un Estado Miembro estimase esencial que se reuniese el Consejo de Seguridad para examinar la cuestión, el Consejo de Seguridad, si esto ocurriese precisamente en víspera de su salida de Nueva York para Europa, debería anular las medidas tomadas y permanecer en Nueva York, para ocuparse de la cuestión urgente y grave que le sería sometida.

Examinemos la cuestión de la eficacia de nuestro trabajo en general, y en particular, la posición de las pequeñas delegaciones que, a pesar de su debilidad numérica, participan importante y activamente en el trabajo del Consejo Económico y Social, del Consejo de Seguridad y de la propia Asamblea General. Cuando estos tres órganos se reúnen en un mismo sitio, las pequeñas delegaciones pueden hacer todo lo que se les exige. Pero supongamos, como parece verosímil, que el Consejo de Seguridad hubiese resuelto salir para Europa con bastante tiempo de antelación a la fecha de apertura de la Asamblea General. ¿Qué pasaría entonces? Las delegaciones permanentes partirán en julio para Ginebra, París, Bruselas o cualquier otro sitio, para asistir a las reuniones del Consejo Económico y Social. Estarían allí ocupadas por espacio de un mes aproximadamente. Después, participarían durante dos meses en los trabajos de la Asamblea General. En fin, que gastarían aproximadamente un mes en idas y venidas. Naturalmente, una parte de su personal habrá de hacer uso de licencia para visitar el país de origen.

Esto significa, si lo piensan bien, que en la práctica las delegaciones permanentes y su personal estarían ausentes de la sede de Nueva York durante seis meses. En todo ese tiempo, tendrán indudablemente que pagar sus gastos de instalación en los Estados Unidos y probablemente no sólo el alquiler de las oficinas, sino también el de sus alojamientos particulares, sin hablar de los gastos de viaje.

Piensen un instante en los gastos y en los inconvenientes que encierra la proposición. Aquí, la mayor parte de nosotros—pequeñas o grandes delegaciones—tenemos nuestras oficinas permanentes, con su personal permanente, bibliotecas, registros, todos sus documentos de anteriores reuniones, carpetas de correspondencia y todo lo demás: máquinas de escribir, mimeógrafos, todo lo esencial para el trabajo eficaz de nuestras delegaciones.

¿Habrá que transportar todo eso a Europa, sin excepción, para que podamos darnos el placer de celebrar allí un período de sesiones de cuatro a seis semanas y regresar después a Nueva York?

Como ya he dicho antes, podría continuar casi indefinidamente enumerando las dificultades y los inconvenientes administrativos del traslado propuesto. Pero permitidme simplemente examinar algunas de las medidas tomadas aquí, en la Secretaría, y trataré de no retener la atención de Vds. demasiado tiempo.

Consideremos, por ejemplo, lo difícil que sería desmontar la actual instalación de interpretación simultánea, que funciona de modo tan eficaz. Todos los instrumentos instalados aquí ¿deberían ser desmantelados e instalados en Europa por un breve período de cuatro a seis semanas y después devueltos y puestos otra vez en su sitio anterior? ¿Se me va a decir que funcionarán lo mismo en Europa? ¿Se me va a decir que no correríamos un riesgo todavía mayor de que "voces fantasmales" interrumpiesen, como ocurrió ayer, los discursos del Sr. Vishinsky? ¿Se me dirá que todos estos aparatos volverán en mejor estado que nunca, después de su estancia en Europa? Podría contestar, según la expresión del propio Sr. Vishinsky: "Señores esto es una farsa". Evidentemente el cambio propuesto entrañaría graves inconvenientes en lo que concierne a la instalación del material.

Consideremos ahora la cuestión de la distribución de documentos. Desearía decir, de pasada, que la distribución de documentos, sobre la que hubo varias reclamaciones el año pasado, ha sido este año excelente. Una de las razones, además del hecho de que el mecanismo mismo ha sido puesto a punto y perfeccionado por dos años de experiencia, es que el centro de distribución está situado aquí, en Nueva York, en el Empire State Building en donde tienen sus oficinas tantas delegaciones. ¿Qué ocurriría en Ginebra, París, Bruselas o cualquier otra parte, en donde las delegaciones estarían forzosamente dispersadas en un espacio más extenso y tendría que instalar sus oficinas en cualquier sitio que tuvieran la fortuna de encontrar?

Pasemos a examinar la cuestión de la grabación de discos y de los archivos. La Quinta Comisión, por ejemplo, puede necesitar en un momento determinado un documento relativo a cualquier detalle de una de las sesiones en Church House; o la Primera Comisión, en cualquier otro momento, y muy legítimamente, puede desear saber lo que dijo tal o cual Estado con motivo de esta o aquella cuestión, en alguna otra ocasión. Hay que recordar que en una de las sesiones plenarias de la Asamblea General, aproximadamente hará una semana, descubrimos de repente que las actas taquigráficas en francés y en inglés estaban en desacuerdo sobre lo que el Sr. Spaak había dicho con respecto a una cuestión importante y nos interesaba sumamente descubrir lo que realmente había manifestado. Descubrimos cual era la verdad, en esta ocasión, muy sencillamente escuchando a la hora del desayuno un disco de su discurso, lo que dispuso todas las dudas. Ahora bien, este procedimiento no podría ser empleado en Europa.

Incluso sin pretender conseguir la misma perfección, habría que prever una gran mudanza de archivos y documentos. El crédito asignado a este efecto asciende a 47.000 dólares, pero debo decir

una vez más que considero este cálculo muy bajo. Todo el mundo sabe que por mucho cuidado que se ponga no será posible transportar a Ginebra, París o Bruselas, todos los documentos que forzosamente requeriremos durante nuestro período de sesiones. Ello daría por resultado investigaciones, excusas, equivocaciones; habría que enviar cablegramas, celebrar conferencias telefónicas trasatlánticas y a pesar de todo las delegaciones no estarían tan bien servidas, ni con mucho, como lo están aquí en Lake Success.

El Sr. Parodi ha dicho que nuestra organización actual presenta inconvenientes y que el viaje a Lake Success, ida y vuelta, es demasiado largo. ¿Pero, qué es lo que nos propone, a cambio? Es dudoso que podamos encontrar instalaciones apropiadas, u hoteles y locales convenientes para uso de las oficinas de las comisiones, o de la Asamblea, lo que hace imposible realmente decidir ahora sobre ello. Por eso se ha propuesto conceder al Secretario General y a una Comisión de nueve miembros la facultad de desplazarse a ver lo que se pueda encontrar—si es posible encontrar algo y escoger el emplazamiento en donde pueda celebrarse el próximo período de sesiones.

Más vale que soportemos nuestros males presentes, que precipitarnos en lo desconocido. Me repugna la idea de sobrecargar a la Asamblea con un inventario completo de todas las dificultades administrativas que se pueden prever. Permítanme preguntarle simplemente: ¿existe alguna institución gubernamental o empresa comercial importante que después de haber invertido tanto dinero, tiempo y energía para llegar a un grado relativamente elevado de eficacia administrativa, como el que hemos conocido este año en Lake Success y en Flushing, renunciase alegremente, a menos que fuese por razones de importancia vital o de fuerza mayor, a utilizar la organización existente y recomendase que se volviese a empezar todo el trabajo abrumador de reunir un nuevo personal, transportar todos los accesorios, equipo, documentos y reorganizar por completo el servicio en algún otro sitio, hasta ahora desconocido, a unas 3.000 millas de aquí?

Naturalmente puede haber razones imperiosas para ello—y si las hay, deben ser de orden político—pero nadie hasta ahora ha demostrado que existen ni que sea imposible evadirlas. Quizás sea inconveniente para nuestros amigos norteamericanos que la Asamblea General se reúna aquí en vísperas de una elección presidencial. Difícilmente lo puedo imaginar. En todo caso, no he oído a ninguno de ellos sugerir que este factor deba ser decisivo. Esto sería, por lo demás, una actitud que deberían abandonar, puesto que la Sede Permanente de las Naciones Unidas será establecida en Nueva York. Supongo que nadie va a sugerir que cada cuatro años tengamos que abandonar los Estados Unidos, para evitar toda molestia con motivo de las elecciones. Espero que la Asamblea General continuará reuniéndose, con diligencia y con éxito, por un largo tiempo en el porvenir a pesar de la coincidencia periódica con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.

Yo no niego—y en esto convengo con el Sr. Parodi—que haya ventajas en celebrar un período de sesiones de la Asamblea General en Europa. Europa tiene necesidad, se merece que se la estimule políticamente con palmaditas en

el hombro, si se permite decirlo así. Mas, por el contrario, también es justo decirlo—aunque me parece que quizá estemos un poco inclinados a olvidarlo—que Europa no ha sido enteramente ignorada en cuanto al emplazamiento de conferencias internacionales en el curso del año próximo. Aquí tengo la lista de estas conferencias. Necesitaría mucho tiempo para leerla, o para señalar el enorme número de conferencias, que comprende varios cientos de sesiones que se celebrarán en Europa durante el año que viene. Habrá conferencias mundiales, conferencias de los órganos principales, conferencias marítimas, sobre la libertad de información, reuniones del Consejo Económico y Social, del Consejo de Administración Fiduciaria, de la Comisión Económica para Europa. En suma, se celebrará en Europa un enorme número de reuniones de primera importancia y, desde este punto de vista, no se puede decir que se haya pasado por alto la importancia política de Europa.

Llegará sin duda el momento en que sean más estables las condiciones y haya mejorado la situación económica en Europa. Convendría entonces que la Asamblea General se reuniera allí. Quizás ocurra este caso dentro de dos años, cuando la Secretaría quedará más o menos desorganizada, con la mudanza de Lake Success a Manhattan. Pero mientras continuemos sufriendo las actuales restricciones y padezcamos, por ejemplo, de una escasez tan marcada de periódicos y de papel de periódico, es demasiado fácil exagerar las ventajas que gozaría Europa o las Naciones Unidas por celebrar un período de sesiones de la Asamblea General en Europa.

De todos modos, las ventajas posibles—yo no niego que las haya, aunque no crea que sean muy importantes—deben ser cuidadosamente comparadas con las desventajas, que creo son absolutamente ciertas. Desde el punto de vista financiero, administrativo y en lo que concierne al rendimiento general, me atrevo a expresar ante la Asamblea General la opinión de que todos los argumentos y todas las razones favorecen que nos quedemos en Nueva York.

Debo añadir, en fin, que quizás exista una cuestión de cortesía política, a la que mi delegación, y estoy seguro todas las demás delegaciones, prestarán toda la atención que merece. El Gobierno de los Estados Unidos y la Ciudad de Nueva York han incurrido en gastos considerables y se han tomado todas las molestias, para hacer posibles, confortables y fructíferas muestras reuniones durante el período presente, período provisional, como sabe todo el mundo. No han dicho nada a este respecto y estoy seguro que no dirán nada que pueda influir en nuestra decisión en uno u otro sentido. Sin embargo, es poco cortés olvidar con tanta rapidez y ligereza la ayuda que nos han prestado.

Pido a los Miembros de la Asamblea General que reflexionen muy seriamente antes de tratar de efectuar ninguna modificación de las medidas actuales que, estoy convencido, no solamente impondrían a nuestras delegaciones la carga de gastos suplementarios muy fuertes, sino que, también, destruirían en gran parte la eficacia de nuestros trabajos y el rendimiento de nuestra Secretaría, tan laboriosamente edificada.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): La lista de las delegaciones que desean ser oídas sobre este tema es la siguiente: Países Bajos, China,

Nueva Zelanda, Cuba, Turquía, Suecia, Polonia, Australia, Francia, Irak, Canadá, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como no existe ninguna otra delegación que desee hablar sobre este tema, se cierra la lista de oradores.

Mañana continuaremos el debate a las 11 horas.

Se levanta la sesión a las 18.40 horas.

114a. SESION PLENARIA

*Celebrada en Flushing Meadow, Nueva York,
el sábado 15 de noviembre de 1947 a las 11 horas.*

Presidente: Sr. O. ARANHA (Brasil).

73. Debate sobre el lugar de reunión de la Asamblea General en su tercer período de sesiones: proyecto de resolución presentado por Francia y Suecia (A/452) e informe de la Quinta Comisión (A/473) (continuación)

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de los Países Bajos.

Sr. BURGER (Países Bajos) (*traducido del inglés*): Para evitar cualquier mala interpretación con respecto a la posición que adoptó sobre el particular, mi delegación—que representa a un país europeo—está ansiosa por explicar su punto de vista acerca de la convocación en Europa del próximo período de sesiones de la Asamblea General. Pero mi delegación lamenta tener que considerar el fondo de esta cuestión en una sesión plenaria, ya que preferiría el procedimiento normal de que los diferentes puntos que figuran en el orden del día sean considerados previamente por una de las comisiones principales.

Por consiguiente, nos permitimos sugerir que el procedimiento seguido por la Mesa sea considerado como una excepción. La Quinta Comisión hubiese podido considerar los aspectos de esta cuestión ya que, tratándose de un organismo más técnico, hubiese podido dar la importancia debida a los aspectos no políticos del problema. El procedimiento que estamos siguiendo presenta el inconveniente de que, por mucha que sea la habilidad con que se presente la propuesta, siempre se dará más importancia a los factores políticos; creo que las observaciones formuladas ayer por Sir Hartley Shawcross¹ confirman mi opinión. Por otra parte, no puedo aceptar el argumento de que este procedimiento dará por resultado una repetición del debate, y que, por el contrario, las discusiones que realizan las comisiones generalmente eliminan debates en la Asamblea General.

Pasando al fondo de la cuestión, mi delegación desea sostener en primer término que la Asamblea General no debería convertirse en un cuerpo móvil. Por diversos motivos, ello constituiría un peligro y una desventaja para nuestra organización. Todos hemos podido observar que, gracias a la experiencia adquirida durante el desarrollo de los diversos períodos de sesiones de la Asamblea General, la Secretaría funciona ahora de manera más satisfactoria, y que los servicios técnicos han alcanzado un grado de perfección que no creo pueda encontrarse en ninguna otra parte. Si bien existen ciertas dificultades, en su mayor parte transitorias, que perjudican nuestro tra-

bajo—tales como la gran distancia que separa Manhattan del lugar donde actualmente se realizan las sesiones—no deberíamos aumentar tales dificultades.

Nuestra joven organización requiere regularidad y estabilidad, para poder aumentar su eficiencia. Con respecto a las circunstancias políticas en torno a las cuales debe evolucionar nuestra Organización, es posible que éstas no permitan crear durante mucho tiempo las condiciones de estabilidad deseables. Esta es otra razón para que obremos de tal manera que las otras circunstancias bajo las cuales debemos actuar permitan que nuestro trabajo se realice de la manera más tranquila y eficaz posible.

Mi delegación estima que la decisión de celebrar la Asamblea General en la Sede sólo debe descartarse cuando existan razones poderosas que así lo aconsejen. Mi delegación consideraría favorablemente la propuesta en debate siempre que sea presentada como una medida excepcional que de ninguna manera constituya un precedente. En su redacción actual, esta propuesta no indica claramente que se trata de una medida de excepción.

En cuanto a los gastos suplementarios que implica, mi delegación mantiene siempre el criterio de que en vista de las dificultades que afligen actualmente al mundo, y principalmente a los países europeos, es necesario que las inversiones se dediquen a los objetivos más perentorios de las Naciones Unidas, es decir, al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a la reconstrucción económica.

No consideramos que el asunto en debate esté comprendido en ninguna de esas categorías. Sin embargo, como el aumento de cuotas provocado por el mayor costo de la celebración de la Asamblea General en Europa, se verá compensado considerablemente por una disminución en los gastos de numerosas delegaciones—incluyendo la de los Países Bajos—podría considerarse que este punto no constituye un factor importante, por lo menos para esos países. No creo que al decir esto me quede corto. Por otra parte, el quedarse corto es una forma típica de la oratoria inglesa, característica que, sin embargo, no puede encontrarse en la declaración formulada ayer por Sir Hartley Shawcross, porque a menos que las cosas hayan empeorado muy recientemente en Europa, creo que todavía quedan algunas sillas donde poder sentarse. Sinceramente, no creo que será necesario transportar estos muebles a Europa. Hasta hace algunas semanas había todavía algunas máquinas de escribir y aun algunas dactilógrafas. Desearía poder alentar al representante del Reino Unido y atenuar su pesimismo, pesimismo que aparentemente trata

¹ Véase el acta correspondiente a la 113a. sesión plenaria plenaria de la Asamblea General.